

REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

(PROVISIONAL)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

8º Reunión - 6º Sesión ordinaria - 21 de mayo de 2008

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **Julio César Cleto Cobos** y
del señor vicepresidente del H. Senado, senador **Juan Carlos Romero**

Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Luis Alberto Tieppo**

Prosecretarios: señor D. **Juan J. Canals**, señor D. **Mario Daniele** y
señor D. **Gustavo Carlos Vélez**

PRESENTES	
BASUALDO,, Roberto Gustavo	RÍOS, Roberto Fabián
BONGIORNO, María José	RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
CABANCHIK, Samuel Manuel	ROMERO, Juan Carlos
CASTILLO, Oscar Anibal	ROSSI, Carlos Alberto
COLAZO, Mario Jorge	SAADI, Ramón Eduardo
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María	SALAZAR, Carlos Eduardo
CORREGIDO, Elena Mercedes	SANCHEZ, María Dora
DÍAZ, María Rosa	TORRES, Eduardo Enrique
ESCUDERO, Sonia Margarita	TROADELLO, Mónica
ESTENSSORO, María Eugenia	URQUÍA, Roberto Daniel
FELLNER, Liliana Beatriz	VERA, Arturo
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro	VERANI, Pablo
FILMUS, Daniel Fernando	VIANA, Luis Alberto
FORSTMANN, Selva Judith	VIGO, Élida María
FUENTES, Marcelo Jorge	VIUDES, Isabel Josefa
GALLEGO, Silvia Ester	
GIOJA, César Ambrosio	AUSENTES CON AVISO
GIUSTI, Silvia Ester	BIANCALANI, Fabio Dario
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita Del Valle
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio	GIRI, Haide Delia
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle	GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
LATORRE, Roxana Itati	JENEFES, Guillermo Raúl
LORES, Horacio	MAYANS, José Miguel Ángel
MARÍN, Rubén Hugo	MAZA, Ada Mercedes
MARINO, Juan Carlos	MENEM, Carlos Saúl
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo	NIKISCH, Roy Abelardo
MARTÍNEZ, José Carlos	SANZ, Ernesto Ricardo
MASSONI, Norberto	
MIRANDA, Julio Antonio	CON LICENCIA
MORALES, Gerardo Rubén	CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	
OSUNA, Blanca Inés	
PAMPURO, José Juan Bautista	
PARRILLI, Nanci María Agustina	
PERCEVAL, María Cristina	
PÉREZ ALSINA, Juan Agustín	
PÉRSICO, Daniel Raúl	
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	
PICHETTO, Miguel Ángel	
PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma	
QUINTELA, Teresita Nicolasa	
RACHED, Emilio Alberto	
REUTEMANN, Carlos Alberto	
RÍOFRÍO, Marina Raquel	

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional
2. Texto unificado: Homenaje a la gesta revolucionaria de mayo de 1810
3. Asuntos entrados
4. Plan de labor parlamentaria
5. PE-36/08 y PE-37/08: Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Cónsul General
6. Consideración en conjunto de proyectos penales
7. Reserva de asuntos
8. Consideración en conjunto de proyectos penales (Continuación)
9. CD-20/08. Creación de una nueva cámara de casación en materia penal
10. Moción de vuelta a comisión
11. CD-20/08: Creación de una nueva cámara con funciones de casación en materia penal (Continuación)
12. CD-19/08: Procedimiento para designación integrantes tribunales orales en lo Criminal Federal
13. CD-21/08 y CD-22/08. Modificación del Código Procesal Penal de la Nación y otras cuestiones conexas
14. CD-22/08 - Reforma del Código Procesal Penal de la Nación
15. CD-26/08 - Creación de un fondo de recompensas para búsqueda de personas
16. Manifestaciones
17. Retiro de un proyecto
18. S-1482/08 - Zona de emergencia y desastre en la provincia de La Pampa
19. OD-165. Presupuestos mínimos de protección ambiental
20. Consideración en conjunto de órdenes del día
 - OD-166: Declaración de interés del V Encuentro Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva y del VI Congreso Argentino de Endocrinología Ginecorreproductiva.
 - OD-167: Declaración de interés del I Congreso Latinoamericano de Enfermedades Raras "ER2008LA".
 - OD-168: Día mundial de la concientización sobre el autismo
 - OD-169: Adhesión a la celebración del Día de la Tierra.
 - OD-170: Estado de avance de los programas y proyectos para detectar y prevenir cambios climáticos. Pedido de informes.
 - OD-171: Derrame del concentrado de minerales ocurrido en la explotación minera Bajo la Alumbraera, Catamarca. Pedido de informes.
 - OD-172: Beneplácito por el informe de la Organización Mundial de Turismo donde consigna que nuestro país es el segundo de América en crecimiento de arribo de turistas.
 - OD-173: Declaración de interés turístico de la temporada invernal en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
 - OD-174: Declaración de interés de la Muestra itinerante "100 años de turismo argentino".
 - OD-175: Declaración de interés turístico de la realización de la XIV Edición de la Cabalgata Brocheriana.
 - OD-176: Intensificación de los controles sobre los comerciantes para que exhiban los precios de sus productos.
 - OD-177: Adopción de medidas para el cumplimiento de la ley 22.802, de lealtad

- comercial y sus modificatorias, respecto a la práctica del denominado redondeo a favor del consumidor.
- OD-178: Repudio por la quema de 1.500.000 de libros durante la dictadura militar, el 30 de agosto de 1980.
21. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
- S-1479/08: Beneplácito por la Clasificación Olímpica para los Juegos de Beijing y obtención de medalla de Bronce en el campeonato de Judo Miami 2008, de una yudoca de Corrientes.
- S-1480/08: Nuevo aniversario del “Museo Naval de la Nación”.
- S-1439/08 y otros: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
- S-1437/08: Día del Bombero Voluntario Argentino.
- S-1438/08 y otros: Día Mundial sin Tabaco.
- S-1408/08: Primer Congreso Correntino de la Lengua y Cultura Guaraní.
- S-1407/08: Cursos de formación de mediadores y de residencia de mediación
- S-1415/08: Homenaje al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo.
- S-1414/08: Homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chacho” Arancibia Laborda.
- S-1413/08: XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina.
- S-1412/08: Homenaje a María Eva Duarte de Perón, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento.
- S-1363/08: 100° aniversario del Teatro Colón.
- S-1197/08: Día Mundial del Donante de Sangre.
- S-1195/08: Reconocimiento a la película “Rancho Aparte”, filmada en San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de Málaga.
- S-1194/08: Reconocimiento al Diácono Juan Espósito, nacido en San Luis, que acompañó y asistió al Papa Benedicto XVI el día 17 de abril de 2008 en la misa celebrada en Washington
- S-1193/08 y otros: Día del Periodista.
- S-1192/08 y otros: Reconocimiento al investigador argentino Dr. Miguel Eckstein por haber recibido el premio Troland 2008 en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América.
- S-1191/08: Reconocimiento a la película argentina “Olga, Victoria Olga”, filmada en San Luis, escrita y dirigida por Mercedes Farriols.
- S-1190/08: II Encuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos.
- S-1139/08: Pesar por la desaparición física del Cardenal Alfonso López Trujillo.
- S-1092/08: Solicitud para que el Consejo de la Magistratura de la Nación arbitre los medios necesarios para que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional N° 25269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación en diversas provincias.
- S-1091/08: Solicitud para que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales

- de Apelación.
- S-1090/08: Solicitud para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Nacional N° 25269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación.
- S-1080/08 y otros: 17° Feria de Arte Contemporáneo ArteBA'08.
- S-1481/08: LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina.
- S-1133/08: 35° aniversario de la creación de la Universidad Nacional de San Luis.
- S-1457/08: Primeras Jornadas Provinciales de Celiaquía.
- S-1218/08: Día Mundial del Medio Ambiente.
- S-24/08: Preocupación por los recursos hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas de las Altas Cumbres cordilleranas patagónicas.
22. Consideración en conjunto de los proyectos reservados en mesa
- S-1424/08: Yudoca neuquino Marín Bustamante.
- S-1425/08: Juegos Panamericanos de Yudo.
- S-1468/08: Beneplácito por la designación de la senadora Forstmann en la presidencia de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
- S-1501/08: Jornadas de Capacitación de Discapacidad en los Medios de Comunicación Social
- S-1502/08: XV Seminario Teórico Práctico de Derecho Notarial y Registral.
- S-915/08: Declaración de interés parlamentario de las Jornadas para la Desertificación.
- S-1342/08: Declaración de interés el Primer Torneo Selectivo Zona Norte y Litoral para el Mundial de Taekwon-Do Argentina 2009.
- S-1343/08: LX Aniversario de la creación de la Escuela 103, del Municipio Colonia Alberdi, Misiones.
- S-1484/08: Conferencia Diplomática de Dublín en la que se llevarán adelante negociaciones para la adopción de un instrumento jurídico internacional que prohíba la producción, almacenamiento, transferencia y uso de municiones de racimo.
- S-1490/08: Reconocimiento al pueblo de la provincia del Chubut por su solidaridad y compromiso hacia el pueblo hermano de Chile con motivo de la erupción del volcán Chaitén.
23. Apéndice:
- I. Asuntos entrados.
- II. Asuntos considerados y sanciones del H. Senado.
- III. Actas de votación.
- IV. Inserciones.
-

— *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 50 del miércoles 21 de mayo de 2008:*

Sr. Presidente. — Con el quórum correspondiente, se declara abierta la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente. — Invito al señor senador Petcoff Naidenoff a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

— *Puestos de pie los presentes, el señor senador Petcoff Naidenoff procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.*
(Aplausos.)

2. Texto unificado: Homenaje a la gesta revolucionaria de mayo de 1810

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir homenaje a los que, con esfuerzo y sacrificio, hicieron posible la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810.

Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará lectura del texto unificado.

— *El texto es el siguiente:*

[Texto unificado]

Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.¹

3. Asuntos entrados

Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.²

4. Plan de labor parlamentaria

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

— *El texto es el siguiente:*

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 21.05.08

Sesión para consideración de Acuerdos.

Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.

Consideración de los Órdenes del Día con proyecto de ley: 165 y 142.

Tratamientos sobre tablas a solicitar:

Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se establece el procedimiento para la designación de los integrantes de los tribunales orales en lo criminal federal de todo el país en los casos de licencia, suspensión, recusación, excusación o vacancia de sus miembros.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

(CD-19/08)

Proyecto de ley en revisión creando una nueva cámara con funciones de casación en materia penal. (CD-20/08)

Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se agilizan las actuaciones procesales en el ámbito penal y se consagra el derecho constitucional de todo imputado a que un pronunciamiento definitivo lo desligue en un plazo razonable del sometimiento a juicio penal. (CD-21/08)

Dictamen en el proyecto de ley en revisión reformando el Código Procesal Penal de la Nación. (CD-22/08).

Proyecto de ley en revisión, creando un fondo de recompensas a fin de contribuir a la detención de personas buscadas por la justicia en causas penales por violación a derechos humanos. (CD-26/08)

Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Gallego y otros, declarando zona de emergencia y desastre a diversos departamentos de la provincia de La Pampa. (S-1482/08)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, expresando beneplácito a la Clasificación Olímpica para los Juegos de Beijing y obtención de medalla de Bronce en el campeonato de Judo Miami 2008, de una yudoca de Corrientes. (S-1479/08)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del "Museo Naval de la Nación". (S-1480/08)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S-1439/08 y otros).

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al Día Internacional del Bombero Voluntario Argentino. (S-1437/08)

Dictamen en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. (S-1438/08 y otros)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés legislativo el Primer Congreso Correntino de la Lengua y Cultura Guaraní. (S-1408/08)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés legislativo los cursos de formación de mediadores y de residencia de mediación. (S-1407/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando homenaje al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo "Polo" Godoy Rojo. (S-1415/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando homenaje al autor y compositor puntano Rafael "Chacho" Arancibia Laborda. (S-1414/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando de interés las XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina. (S-1413/08)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento. (S-1412/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del 100° aniversario del Teatro Colón. (S-1363/08)

Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. (S-1197/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento a la película "Rancho Aparte", filmada en San Luis, por haber

recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de Málaga. (S-1195/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento al Diácono Juan Espósito, nacido en San Luis, que acompañó y asistió al Papa Benedicto XVI el día 17 de abril de 2008 en la misa celebrada en Washington. (S-1194/08).

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando reconocimiento a la prensa del país, con motivo de conmemorarse el "Día del Periodista". (S-1193/08 y otros)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando reconocimiento al investigador argentino Dr. Miguel Eckstein por haber recibido el premio Troland 2008 en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América. (S-1192/08 y otros)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento a la película argentina "Olga, Victoria Olga", filmada en San Luis, escrita y dirigida por Mercedes Farriols. (S-1191/08).

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de interés parlamentario la realización del II Encuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos. (S-1190/08)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando pesar por la desaparición física del Cardenal Alfonso López Trujillo. (S-1189/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso y otros, solicitando que el Consejo de la Magistratura de la Nación arbitre los medios necesarios para que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional N° 25269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación en diversas provincias. (S-1092/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso y otros, solicitando que el Poder Ejecutivo Nacional tome las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional N° 25269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación en diversas Provincias. (S-1091/08)

Proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso y otros, solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional N° 25269, poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación en diversas provincias. (S-1090/08)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, declarando de interés cultural y parlamentario la 17° Feria de Arte Contemporáneo ArteBA'08 (S-1080/08 y otros)

Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés parlamentarios el LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina. (S-1481/08)

Proyecto de declaración del senador Persico, expresando su adhesión por la celebración del 35 aniversario de la creación de la Universidad Nacional de San Luis. (S-1133/08)

Proyecto de declaración del senador Persico, declarando de interés parlamentario la realización de las "Primeras Jornadas Provinciales de Celiaquía". (S-1457/08)

Dictamen en los proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al día Mundial del Medio Ambiente. (S-1218/08)

Proyecto de declaración del senador Lores, expresando su preocupación por la disponibilidad, acceso y mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y niveo en las cabeceras de cuencas de las Altas Cumbres cordilleranas patagónicas. (S-24/08)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero ratificar lo expuesto en la reunión de labor parlamentaria.

Atento a que el plan de labor quedó confeccionado con un pedido del bloque oficialista vinculado con el tratamiento sobre tablas de asuntos atinentes a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quisiéramos iniciar esta sesión con la ratificación de esos temas.

Asimismo, también pretendemos la consideración sobre tablas de los dos pliegos que fueron tratados hoy por la Comisión de Acuerdos. Me refiero a la propuesta para ocupar el cargo del embajador en la República de Honduras del ex vicegobernador de la provincia de Salta, señor Walter Raúl Wayar, y a la correspondiente al cargo de cónsul en la ciudad de Miami, del señor Francisco Miguel Talento.

De existir conformidad, la idea sería ir por partes y, como es norma, tratar en primer lugar los acuerdos. Luego, pediría el tratamiento sobre tablas de los proyectos a que hice alusión y que tienen dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, dado que se emitió dictamen en cada uno de los cinco temas que pondremos en consideración para su votación.

Si hay asentimiento, los enumeraría ahora, para estar preparados y en conocimiento; caso contrario, trataríamos en primer lugar los acuerdos.

Sr. Presidente. — Esta Presidencia cree conveniente seguir el orden ya establecido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.

Acuerdos

5. PE-36/08 y PE-37/08: Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Cónsul General

Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdos.

Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: como bien decía el presidente de mi bloque, y habiendo asentimiento para tratar los pliegos sobre tablas, quiero informar que, en el día de la fecha, recibimos en la Comisión de Acuerdos —en audiencia pública— a don Walter Raúl Wayar, propuesto como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme el artículo 5° de la Ley de Servicio Exterior de la Nación, y a don Francisco Miguel Talento. Ambos asistieron a la comisión en el día de la fecha, donde se les hizo una evaluación, formulándoseles diversas preguntas. En función de ello, al terminar las audiencias públicas, se emitieron sendos dictámenes de comisión, que fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, no hay objeción para tratarlos; inclusive, si no hubiera observaciones que formular, se podrían votar ambos en forma conjunta mediante una única votación. Como dije, hay asentimiento para el tratamiento.

— *Asentimiento.*

Sr. Presidente. — ¿Algún senador requiere alguna aclaración o quiere hacer uso de la palabra?

Sr. Massoni. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que votaré en contra del pedido para designar en el cargo al ex vicegobernador de Salta, atento a las siguientes circunstancias.

En primer lugar, a mi entender, no se cumplen todas las exigencias de la ley y, en

Sr. Pichetto. — Sí.

Simplemente quiero hacer conocer a la Cámara cuáles son los temas que vamos a tratar...

— *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Martínez (Alfredo). — Hay que votar, señor presidente.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.³

Queda constancia de la abstención del bloque de la Coalición Cívica, y del voto negativo del señor senador Massoni para el caso del ex vicegobernador de Salta, señor Wayar.

Sr. Pichetto. — Entonces, ¿quedaron votados los dos pliegos?

Sr. Presidente. — Efectivamente.

6. Consideración en conjunto de proyectos penales

Sr. Presidente. — A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas acordados.

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de iniciativas que reforman el Código Procesal Penal y que tienen como objetivo central el acortamiento de plazos en el procedimiento, a efectos de que las causas en la Argentina no se demoren indefinidamente.

Es de interés del Poder Ejecutivo impulsar estas reformas para avanzar fuertemente en las causas relacionadas con los derechos humanos y con toda clase de delitos comunes. A tal fin, hay un plexo de normas que se reforman con a la idea central de lograr una mayor rapidez y celeridad en los procesos.

Fundamentalmente, se trata de la instalación de la oralidad en las instancias de apelación ante la Cámara correspondiente y ante la de Casación, para evitar el mecanismo de recursos y de artilugios defensivos que se traban indefinidamente en las alzas respectivas y que dilatan largamente los procesos. Está acreditado en los procesos de casación la mecánica recursiva que lleva a transitar largo tiempo en este tipo de instancias y que no permite llegar al proceso definitivo del juicio oral. Los cinco proyectos apuntan a eso, es decir, a fortalecer el sistema de la casación.

Hoy funciona una Cámara de Casación con tres salas y se estaría creando una nueva Cámara que atendería toda la materia y los recursos del interior del país. La Cámara de Casación que está en funcionamiento atendería todos los recursos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que lo inherente al conurbano y al resto de la materia recursiva del interior sería abordado por la nueva Cámara. Entonces, a través de esta propuesta, el Poder Ejecutivo tiende al fortalecimiento del sistema institucional, nutriendo de nuevos recursos humanos que darían lugar a lo dicho al comienzo, es decir, a una mayor celeridad en la tramitación de las causas.

También se crea un sistema de subrogancias, que es coincidente con la sanción votada la semana pasada. Es aplicable al Tribunal Oral Federal y tiene el plazo que dure el

³ Ver el Apéndice.

juicio oral, a fin de no afectar el principio de defensa de los imputados; es decir, tiene como objetivo que el proceso, en su integralidad, cuente con los mismos jueces. Esta es la diferencia con respecto a los de primera instancia y de Cámara, donde —como lo saben todos, ya que fue materia de debate— no hay plazos. En este caso, el plazo obedece al principio de legítima defensa y a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional.

Por otro lado, se crea un fondo de recompensa que amplía los sujetos que pueden ser sus beneficiarios. En este caso, se apunta fuertemente a la temática de derechos humanos, esto es, a casos en los que han estado involucradas fuerzas de seguridad y donde gente de su propio seno, en actividad o no, pudieran ser beneficiarios de la recompensa. Diría que lo novedoso es la posibilidad de que personas que fueron parte de fuerzas de seguridad puedan aportar información porque, además, son los que indudablemente pueden conocer hechos relacionados con desaparición de personas, con la aparición de niños nacidos en cautiverio, etcétera. En fin, se trata de cuestiones sobre las que esas personas tienen conocimiento por haber estado involucradas. Este es el proyecto C.D. 26/08, de creación del fondo de recompensas.

Además, están: el expediente C.D. 21/08, sobre agilización de las actualizaciones procesales en el ámbito penal y la consagración de un derecho incluido en el Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a un plazo razonable en la duración de los procesos; el expediente CD 22/08, que es la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, con el objeto de propender a la agilización de las causas; el C.D. 20/08, que es la creación de una nueva Cámara con funciones de casación penal; y el expediente C.D. 19/08, proyecto de ley sobre integración de los tribunales orales en lo Criminal y Federal, referido a la subrogancia para los tribunales orales federales.

Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de estos proyectos, porque hay cierta urgencia. El Poder Ejecutivo ha pedido que hagamos un esfuerzo en tal sentido. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los integrantes de la Comisión de Justicia y a su presidente, que han trabajado fuertemente ayer y hoy para que haya dictamen. La Cámara de Diputados les ha dado sanción a estas iniciativas, de manera que, apenas los vote y apruebe el Senado, se pondrían en marcha.

Con estos fundamentos, solicitamos el tratamiento sobre tablas de estos cinco proyectos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional trae dos temas para que se traten en esta sesión. El primero de ellos es la petición de dos acuerdos. Las bancadas de la oposición han accedido a dar los dos tercios para que se traten. A pesar de que se trataron en la Comisión de Acuerdos recién esta mañana, no queremos obstaculizar las designaciones que propone el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través del bloque de la mayoría, pide el tratamiento urgente de estos cinco proyectos que acaban de detallarse y que prácticamente llegaron ayer. Las comisiones dieron tratamiento ayer a estos proyectos, que cuentan con sanción de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos observaciones de fondo y de forma, pero antes, quisiera señalar el fundamento más importante de nuestro voto negativo a la posibilidad de viabilizar el tratamiento sobre tablas de estos proyectos en el día de hoy.

No estamos de acuerdo con facilitar los dos tercios para el tratamiento de los cinco proyectos. Seguramente, los miembros informantes de cada una de las iniciativas —en esta sesión, si logran los dos tercios; si no la semana que viene, como corresponde— informarán y nosotros argumentaremos nuestra posición.

Se sabe que con relación al proyecto C.D. 19/08, que es complementario al proyecto

que se ha tratado la semana pasada sobre subrogancias, nosotros votamos en contra. Hemos hecho sugerencias que lamentablemente no fueron tenidas en cuenta. Sobre ese tema, profundizaremos más adelante.

También tenemos objeciones al proyecto de ley contenido en el expediente C.D. 20/08, por el que se crea la Cámara con funciones de casación en material penal. Tenemos objeciones que oportunamente se explicarán hoy o la semana próxima, oportunidad en que nuestra bancada votará por la negativa.

Con relación al proyecto C.D. 26/08, de creación del Fondo de Recompensas, también tenemos objeciones. Creemos que hay que debatir a fondo este tema, no obstante lo cual, en su momento, recibirá el voto negativo de nuestra bancada por las razones que oportunamente daremos.

Los otros dos expedientes —C.D. 21/08 y **C.D. 22/08**— son proyectos de ley que modifican el Código de Procedimientos Penal. Desde nuestro punto de vista, son soluciones que instrumenta el Poder Ejecutivo, que hasta acá no había adoptado. En este sentido, tal como anticipamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, nosotros habíamos planteado la necesidad de que estos temas se debatieran. No puede ser que se traten de un día para el otro, porque haya un requerimiento del Poder Ejecutivo —que nosotros entendemos—. Pero el Poder Ejecutivo también tiene que entender que hay que darle tiempo al Senado de la Nación para enriquecer los proyectos.

No sé si votaremos en contra de estos proyectos o no, porque, en verdad, nosotros habíamos planteado otra solución. En efecto, el año pasado presentamos una iniciativa, que había sido trabajada fundamentalmente por los doctores D'Alessio y Ricardo Gil Lavedra, en la que se planteaba otra solución, también con la modificación del Código de Procedimiento Penal, pero estableciendo un régimen específico, especialmente para las causas de violación de derechos humanos. En este caso, el Poder Ejecutivo aporta otro criterio, que también modifica el Código de Procedimiento Penal, pero para todos los tipos de delitos.

Nosotros creemos que podemos hacer aportes. En este sentido, hemos pedido —inclusive ayer lo solicité en labor parlamentaria— que el tema se siga debatiendo. Así, queremos invitar a juristas como Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Alessio; y seguramente el bloque de la mayoría tendrá a otros juristas o a quienes pergeñaron el proyecto desde el Poder Ejecutivo, para enriquecer el debate.

Así que, como primer tema, vamos a votar en contra de la posibilidad de que se traten el día de hoy estos proyectos. Le pedimos al bloque oficialista que nos permita debatir; y que este Congreso funcione como corresponde, que no terminemos —como se dice— convertidos en la escribanía que ratifica los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, sin más trámite y sin ningún tipo de modificación. Reitero que creemos que podemos enriquecer las iniciativas, especialmente estas dos, respecto de las cuales recién dije que no estamos en condiciones de asegurar si las votaremos en contra o a favor. Entendemos que habrá que enriquecer los proyectos, respecto de los cuales tenemos muchas observaciones.

Por estos motivos, no estamos de acuerdo. Creemos que este Senado debe funcionar a pleno. La verdad es que son temas profundos que seguramente ameritan no sólo el trabajo rápido de la Comisión sino también la consulta a juristas, porque son temas de fondo.

Entendemos la urgencia. Creemos que la próxima semana se pueden tratar los proyectos y, seguramente en el caso de los expedientes C.D. 21/08 y del C.D. 22/08, con aportes que nosotros podamos incorporar.

Por eso es que vamos a votar negativamente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani y, después, el senador Rodríguez Saá.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adelanto mi voto negativo a los dos tercios solicitados por la mayoría.

Se habló de los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Yo formo parte de dicha Comisión y en su seno planteé que la envergadura de los temas en tratamiento —me refiero a los cinco expedientes en cuestión—, así como el pedido efectuado por el integrante del radicalismo en la Comisión, referido a la citación de especialistas y a la postergación del debate, ameritaban que nos diéramos una semana más para que estos temas pudieran ser debatidos en profundidad. Y digo esto porque estamos hablando de la creación de Cámara de Casación Penal y de la modificación de un código, es decir, de temas que tienen una gran importancia.

Estamos en el juego parlamentario y tiene total legitimidad el pedido de tratamiento sobre tablas y, a lo mejor, conseguir el número. Pero hay una asimetría muy grande entre la importancia de los temas en tratamiento con esta premura, donde el único fundamento es “nos lo pidió el Ejecutivo” y no hay otro fundamento. La postergación del tratamiento por una semana no puede significar un perjuicio importante, porque —y lo digo con toda sinceridad— en el mismo momento, no se puede plantear el aplazamiento de otros temas que sí tienen una gran importancia, porque estamos hablando de la sequía en provincias argentinas. Entonces, no existe correlación entre la premura en un caso y el pedido de una semana en el otro.

Por lo tanto, tal como desde la oposición lo solicitamos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales —en mi caso, tengo posición tomada en los cinco temas: si se habilita su tratamiento sobre algunos, estoy a favor; en otros, estoy en contra—, me parece que hubiera sido de sentido común, y al Senado le hubiera hecho bien, que este tratamiento se diera con el debate respectivo, de acuerdo con la gran importancia de los temas que están en tratamiento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: el Grupo Parlamentario Federal ha deliberado y va a votar de dos formas. Un grupo va a votar a favor del tratamiento sobre tablas y quien habla, la senadora Negre de Alonso y el senador Rossi vamos a votar en contra; y voy a fundamentar por qué vamos a votar en contra.

Nos parece que este paquete de leyes que se presentan tienen una tremenda cantidad de errores que los argentinos vamos a pagar caro. Entonces, el tema se merece un tratamiento más profundo en la Comisión. Además, una semana no altera en absoluto el resultado final, salvo en la calidad, porque es muy probable que podamos enriquecer y corregir los proyectos, lo que no hemos podido hacer ahora, fruto de la falta de tiempo; y no de nuestra parte sino desde la presentación de los proyectos y su tratamiento. En consecuencia, vamos a votar en la forma que he señalado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: en nombre de la Coalición Cívica, quiero también adelantar que, por motivos similares a los expresados, no vamos a habilitar el tratamiento de estos temas. Creemos que para asuntos tan importantes deberíamos tener el tiempo necesario para poder estudiar en profundidad. Voy a dar el ejemplo de dos proyectos, uno de los cuales compete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está referido a la creación de esta Cámara de Casación Nacional en lo Penal.

Tal vez, algunos de los senadores de otras provincias — que, como nosotros no han tenido tanto tiempo de estudiar el tema— no sepan que hace un par de años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó un Código de Procedimientos Penal que no contempla la figura de una Cámara de Casación en lo Penal. Yo era legisladora de la Ciudad en ese

momento y tuve la suerte de votar dicho código, en el marco de la transferencia progresiva de competencia penal, que se está llevando adelante desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 1998 y que está en vigencia, tampoco contempla la figura de una Cámara de Casación.

Se dice en los fundamentos de este proyecto que su creación es para agilizar las causas de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires que están pendientes. Pero para ello, tendríamos que proceder a su transferencia y no a la creación de una Cámara de Casación en lo Penal para la justicia ordinaria, que no está prevista en la organización de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería dejar planteado esto, para que sea tenido en cuenta por los señores senadores; especialmente, por el tercer senador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque este proyecto importa un avasallamiento a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Entonces, espero que nos demos un tiempo para analizarlo. Nosotros estamos dispuestos a debatirlo con otros senadores. Pero, realmente, creo que debemos darnos un tiempo para no ir en una dirección contraria a la transferencia de competencias penales que ya hemos hecho en dos instancias. Por eso, entiendo que debemos analizar con mayor profundidad este paquete de proyectos de ley.

Otro tema que incluso es mucho más importante y que merece una reflexión más profunda es el referido al otorgamiento de recompensas monetarias o económicas con relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad. Esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. No podemos degradar la búsqueda de la verdad en estos temas —que no se refieren al narcotráfico ni a ilícitos comunes sino a crímenes de lesa humanidad— al pago de recompensas.

Por eso, creo que este asunto amerita que lo estudiemos con mayor profundidad en comisión. Existe un proyecto del radicalismo según el cual, tal vez, lo más apropiado sería tener un régimen de protección de testigos, para que podamos saber toda la verdad de lo que pasó en aquel período. Porque no es con recompensas económicas como la Argentina va a poder encontrar, saber y juzgar su pasado brutal y cruel.

Así que doy el ejemplo de estos dos temas, que merecen que el Senado de la Nación les dedique el tiempo necesario en comisión, para poder estudiarlos antes de debatirlos sobre tablas aquí en este Cuerpo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nicolás Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: quiero formular una sola aclaración. El expediente C.D. 19/08, que se refiere justamente al sistema de designación de jueces subrogantes para los tribunales orales federales, que tiene dictamen y cuya habilitación sobre tablas se ha solicitado, tiene un C.D. complementario, que es el 29/08 y que consiste en una fe de erratas, dado que, en realidad, el inciso 2 del artículo 1°; en lugar de decir "Cámara Nacional", debe decir "Cámara Federal".

En consecuencia, solicito que cuando se someta a votación la habilitación sobre tablas de este asunto, se vote y apruebe la consideración de ambos expedientes, es decir, los contenidos en los C.D. 19 y 29 de 2008, porque este último —reitero— contiene la fe de erratas que complementa el primer asunto mencionado, referido a los jueces subrogantes para los tribunales orales federales.

Sr. Presidente. — Ya se ha expresado cada uno de los bloques. Creo que se puede votar todo en bloque y de manera electrónica. Así que vamos a votar el tratamiento de los cinco puntos, con el agregado expresado por el señor senador Nicolás Fernández.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: no sé si el bloque que representa el señor senador Rodríguez Saá planteó votaciones distintas por proyecto...

Sr. Presidente. — No, no...

Sr. Morales. — Porque en tal caso, habría que votar por proyecto, señor presidente...

Sr. Presidente. — No, no...

Sr. Morales. — Nosotros vamos a votar en contra de todo, así que si no tienen observación, votemos en paquete.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se requieren 40 votos afirmativos.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 1.*⁴

Sr. Presidente. — Quedan habilitados los temas propuestos.

Pasamos a la consideración de los órdenes del día.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo que entremos de lleno en el debate que hemos pedido sobre las leyes procesales. Pido que empecemos a tratar tema por tema, le demos la palabra a nuestro miembro informante, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y, después, pasemos a considerar los órdenes del día.

7. Reserva de asuntos

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas de dos proyectos. Si esta es la oportunidad, prosigo.

Sr. Presidente. — Continúe, señor senador.

Sr. Rodríguez Saá. — En oportunidad de la visita del señor jefe de Gabinete, hice dos exposiciones: una sobre los problemas nacionales y, otra, vinculada a la problemática de la provincia de San Luis.

En ese entonces, sostuve que la provincia de San Luis estaba discriminada. El señor jefe de Gabinete nos contestó que no y, además, negó que su informe dijera que las audiencias solicitadas por el gobernador de San Luis las trataba Ceremonial y Protocolo, aclarando que ello era absolutamente falso. Y también dijo que a él no se le habían pedido audiencias.

Ahora bien, el lunes vemos por televisión que se realiza un acto en Casa de Gobierno, para aprobar obras públicas que se harían en las provincias de Cuyo. Allí estaban presentes los señores gobernadores de San Juan y de La Rioja; el señor gobernador de San Luis no estaba invitado. Además, cuando escuchamos cuáles eran las obras a realizarse, no había ninguna en San Luis.

Entonces, pedí una audiencia al señor jefe de Gabinete, para ir acompañado por los legisladores nacionales, a los fines de plantear el tema. No me ha contestado nada. En consecuencia, hoy ratifiqué el pedido por escrito, para que quede documentado, y ahora solicito que se apruebe el tratamiento sobre tablas de los expedientes S.1505/08 y S.716/08, de interpelación al señor jefe de Gabinete y al señor ministro del Interior.

El referido a este último funcionario, es el mismo caso; cuando íbamos a tratar la ley

⁴ Ver el Apéndice.

8. Consideración en conjunto de proyectos penales (Continuación)

Sr. Presidente. — Senador Pichetto: usted había solicitado un cambio de orden.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: una breve reflexión.

Considero que lo más conveniente sería hacer un abordaje de los temas en forma conjunta, como se suele hacer habitualmente cuando se trata este tipo de cuestiones. La idea es desarrollar cada punto, pero que el orador se refiera a los cinco temas. Posteriormente, se votaría por separado cada proyecto. Creo que esta mecánica agilizaría el debate.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: creemos que lo mejor es tratar tema por tema.

Sr. Presidente. — De todas formas, queda a criterio de la comisión la forma en que se presenta cada tema.

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: considero que esa tiene que ser una decisión reservada al criterio de cada bloque. Si el bloque de la mayoría cuenta con un miembro informante para todos los temas, es una cuestión de dicho bloque.

La oposición tiene sus criterios para el abordaje de estos cinco proyectos de ley, y cada senador abordará los temas según lo que tenga intención de dejar constancia.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: una última reflexión, y si no hay acuerdo, se considerará tema por tema.

Para la consideración en general, puede hacerse un desarrollo de los cinco proyectos pues las temáticas están interrelacionadas; y en el tratamiento en particular, obviamente, cada proyecto será votado en forma individual.

Eso es lo que planteaba; además, es un sistema que ya hemos adoptado respecto de cuestiones análogas a las que abordan estos proyectos, que son reformas en materia procesal penal. Pero si no hay asentimiento, no tengo inconveniente en que se avance tema por tema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: creo que sería mejor considerar cada tema en forma separada. Si bien todos tienen que ver con la Justicia, por tratarse de cuestiones completamente diferentes y, además, de una jerarquía importante, pienso que lo más conveniente es individualizarlas y que se argumente por separado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: el Grupo Parlamentario Federal también se opone a que se traten los cinco temas en forma conjunta.

Al respecto, tenemos un listado de preguntas para hacerle al presidente de la Comisión, y muchas dudas. Por ejemplo, no puede mezclarse la creación de una cámara de casación y de una cámara federal, con las reformas recursivas. Nosotros queremos saber acerca del efecto devolutivo y del efecto suspensivo de los recursos, y qué pasará con los

fallos "Llerena" y "Quiroga".

Queremos que el presidente de la Comisión nos explique cada uno de los temas a efectos de ir definiendo el voto, porque tenemos dudas y en el poco tiempo de que dispusimos para analizar las iniciativas no pudimos evacuarlas.

Además, todos son proyectos importantes. La modificación del Código Procesal Penal no es una cuestión menor; pero existen superposiciones. Por ejemplo, en una de las iniciativas se habla de una cámara que todavía no se ha creado. Por lo tanto, queremos darle a estos temas la importancia que se merecen; en ese sentido, tenemos toda la tarde para debatir.

Debemos definir nuestro voto con responsabilidad; en consecuencia, queremos tratar cada uno de los temas en profundidad para después votarlos en forma individual.

9. C.D.-20/08. Creación de una nueva cámara con funciones de casación en materia penal

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se crea una nueva cámara con funciones de casación en materia penal (C.D. 20/08)

¿Usted va a informar, señor senador Nicolás Fernández, como presidente de la Comisión?

Sr. Fernández. — No. En virtud de la observación formal que se hizo, primero va a informar el señor senador Marín sobre la creación de la Cámara Federal de Casación Penal.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Han llegado en revisión de la Cámara de Diputados una serie de proyectos que, desde mi punto de vista, tienen total interrelación, más allá de las objeciones que formulan algunos colegas. Precisamente, uno de ellos tiene que ver con la creación de una nueva cámara en lo criminal y correccional con competencia ordinaria en la Capital Federal. En este caso se cambia su denominación: así, en lugar de Cámara Nacional de Casación Penal pasa a denominarse Cámara Federal de Casación Penal. Además de ello se vuelve un órgano más especializado, por cuanto su competencia se limita a delitos federales, con competencia económica y penal tributaria.

Varios colegas se han exteriorizado sobre este proyecto de ley, señalando que es necesario su aprobación porque el Poder Ejecutivo tiene prioridad acerca de este tema. En ese sentido, quiero decir que, en realidad, es la sociedad argentina la que tiene prioridad en cuanto a la sanción de este tipo de leyes. Hemos escuchado una infinidad de veces en este recinto y en los medios de comunicación los problemas que tienen los procesados por la cantidad y el cúmulo de acciones que debe resolver el Poder Judicial. Incluso, acá hemos hablado muchísimas veces sobre la demora del Poder Judicial y se lo ha cargado a este de responsabilidad por ello. Pues bien, hoy tenemos la posibilidad de poder acercar al Poder Judicial nuevos elementos que le permitirán proceder con mayor celeridad. Por ello, más allá de la sana preocupación de algunos colegas que solicitaron más tiempo para analizar este proyecto, creo que es mucho más sano que nos preocupemos por los procesados y detenidos, a quienes la demora en la sanción de esta iniciativa les significa no recuperar su libertad.

A ello apunta el Poder Ejecutivo cuando nos envía este proyecto, y así lo exterioriza en las tres iniciativas referidas a la materia penal. El objetivo es tratar de descomprimir el cúmulo de causas a cargo de los jueces de ejecución penal en la Capital Federal. Es cierto que, tal vez, el proyecto de ley no contenga algunos detalles que exteriorizaron distintos colegas. Puede ser que sea así, pero eso es algo que analizaremos cuando lleguemos al tratamiento de cada artículo, no obstante lo cual cabe señalar que todo ello puede ser mejorado a través de la presentación de otro proyecto de ley.

Ahora bien, en la comisión se plantearon en el día de ayer dos objeciones.

Precisamente, a una de ellas se refirió hace unos minutos la colega por Coalición Cívica, quien sostuvo que se vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, nosotros creemos que no se vulnera, en absoluto, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial. A través de este proyecto, se transfiere la competencia en materia de casación, de recursos de inconstitucionalidad y de revisión de un tribunal nacional, que es la actual Cámara Nacional de Casación Penal, a otro tribunal de competencia nacional. Esto es, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que se crea a través del presente proyecto.

Los delitos caen bajo la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y los no federales se transfieren a la nueva Cámara. En lo que hace a los delitos de menor gravedad comprendidos en la ley 26.357, que aprobó la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se amplía el acuerdo, será tratado en su momento por el Senado de la Nación. Creo que en ese aspecto no se vulnera en absoluto lo que está relacionado con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la comprensible preocupación que puedan tener los legisladores que representan a la Ciudad Autónoma.

Todo esto tiene un solo objetivo, que es acelerar los plazos en las apelaciones y evitar las demoras que permiten las distintas acciones legales a que dan lugar las leyes y que muy bien utilizan los abogados mediante diversos artilugios legales para no llegar a sentencias que involucran tanto a los procesados como a las víctimas, y que son necesarias para hacer los reclamos de alzada o para conocer a los responsables de los hechos cometidos.

Ayer se trató el tema en la Cámara de Diputados y, en ese sentido, debo reconocer que estaba equivocado en cuanto a la comprensión de lo que establece el artículo 11. Hubo una fe de erratas en ese texto, vinculada con una coma. Nosotros creíamos que había una confusión en cuanto al texto, pero los señores diputados aclararon que solamente faltaba una coma.

El artículo dice que los jueces de primera instancia, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales orales concurrirán a su despacho todos los días hábiles durante las horas en que funcione el tribunal. Los jueces de la Corte Suprema lo harán en los días y horas que fijen para los acuerdos y audiencias. Particularmente, había creído que el problema del cumplimiento se refería exclusivamente a los jueces de primera instancia pero, por lo que puede verse y según la explicación dada por los señores diputados, se refieren a todos, a excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Otro proyecto que tiene relación indefectiblemente con esto, porque no es nada más...

Sr. Presidente. — Senador Marín: la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción, ¿la concede?

Sr. Marín. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como el senador va a referirse a otro proyecto y quedamos en que se tratarían en forma individual, no sé si ya ha concluido con la fundamentación del presente proyecto, dado que algunos senadores tenemos preguntas y dudas.

Sr. Presidente. — Así quedamos.

Sr. Marín. — La idea era realizar una exposición en general sobre los tres proyectos, que —a nuestro criterio— tienen una interrelación total, se refieren a lo mismo. En la exposición

del vicepresidente de la comisión, del bloque de la Unión Cívica Radical, se prestó acuerdo para hacerlo, no obstante que, después, el senador que quiera pueda referirse a cada proyecto en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: el presidente de la comisión ha explicitado los proyectos en forma general.

Con todo respeto a la senadora Negre de Alonso, a quien le reconozco una trayectoria jurídica importante, aclaro que no estamos en un tribunal de preguntas y respuestas.

Nosotros vamos a dar nuestros fundamentos sobre los proyectos, que fueron evaluados en el marco de la Comisión de Justicia y tienen dictamen. El presidente de la Comisión no se va a someter a preguntas y respuestas porque estaríamos desvirtuando el marco del debate.

Estoy de acuerdo con que los senadores expongan sus posiciones, fijen criterio, planteen dudas y hagan preguntas, dejándolas en el terreno de la interrogación, que dejen abierto interrogantes sobre el marco normativo, pero —reitero — el presidente de la Comisión no se va a someter a un cuestionario. Va a fundamentar los proyectos sobre la base de los dictámenes y, luego, todo el mundo hablará, como ocurre en el debate parlamentario. Lo quiero clarificar, porque si no estaríamos distorsionando la discusión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: tengo bien claro que estoy en el Parlamento, en el Senado de la Nación y no en el programa de televisión *Odol Pregunta*.

Por ejemplo, recién acaba de hacer una aclaración el presidente de la Comisión con respecto a la fe de erratas, que es una de las preguntas que queríamos hacerle, pero la intención no era someterlo a un interrogatorio sino, simplemente, aclarar algunas cuestiones para que —como dije al principio— podamos ir decidiendo nuestro voto.

Agradezco muchísimo al senador Pichetto por la aclaración que me hizo, pero le quiero decir que yo tengo absolutamente claro dónde estoy sentada y que esto no es el programa *Odol Pregunta*. Entonces, escuchamos y, luego, cuando tengamos la palabra, hablaremos. Pero lamentamos que sea así, porque no se pueden ir haciendo aclaraciones. Por ejemplo, en este tema al que se acaba de referir el senador Marín, queríamos preguntar, para que se aclarara, cómo era la fe de erratas. Listo, ya está, todos lo comprendemos.

Pero si la decisión, a pesar de lo que me pareció que se acordó recién, es seguir tratando todos los temas en conjunto, bueno, el oficialismo tiene la mayoría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Marín.

Sr. Fuentes. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La lista de oradores, por favor...

Sr. Fuentes. — Una aclaración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Señor presidente: entendí perfectamente que la oposición iba a explicitar sus posiciones conforme a un método y admitía que el bloque mayoritario se expresara conforme a otro método.

Hay discusiones que deben ser hechas en el seno de la Comisión y otras que son propias del recinto. Se trata sólo de una aclaración formal.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros hemos planteado que se trate asunto por asunto. Nosotros pedimos que el tema se trate la semana que viene. Si el bloque oficialista no está dispuesto...

Sr. Pichetto. — Está habilitado. No vamos a discutir esto...

Sr. Morales. — Estoy haciendo uso de la palabra sobre la metodología y aclarando cuál es la posición del bloque radical.

Sr. Presidente. — Termine, senador Morales.

Sr. Morales. — Nosotros pedimos el tratamiento tema por tema.

Sr. Pichetto. — Muy bien, presidente. Acaba de exponer el miembro informante sobre el primer tema.

Sr. Morales. — Listo, empezamos tema por tema.

Sr. Presidente. — Se abre la lista. Tengo anotado a los senadores Morales, Giustiniani, Rodríguez Saá, Giusti...

Sr. Marín. — Si me permite, quisiera terminar, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Marín.

Sr. Marín. — Primero, pido disculpas a la señora senadora por San Luis por no haber hecho referencia al inicio a la fe de erratas que mandó la Cámara de Diputados. Le pido disculpas porque tal vez hubiésemos evitado la interrupción.

Con relación al primer proyecto, quiero decir que esto tiene relación con la admisión del recurso de apelación por parte de la Corte, y una de las garantías que quiere dar este proyecto de ley es que se pueda recurrir a un órgano superior. La Corte, en este caso, no solamente admite el recurso con argumentos legales, sino también por los hechos. Este era un tema que aprobaba la Corte, pero que también habían indicado los organismos internacionales.

Si se va a tratar tema por tema, con esto dejo expuesto el concepto genérico del proyecto de ley que estamos tratando. Después, seguiremos con las actuaciones procesales, si así lo definen. Yo no lo había interpretado de esa manera. Creí que los colegas habían interpretado que se podían tratar genéricamente los tres temas y, a partir de ahí, cada uno de los proyectos podía considerarse en forma particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: la verdad es que los temas que vamos a tratar en el día de la fecha son más que importantes. Sinceramente, lamento que, más allá de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales —que integro—, el propio Senado, los propios integrantes de este cuerpo no hayan tomado este tema —lo digo con el mayor de los respetos— con la seriedad que conlleva. En primer lugar, porque cuando se habla de un reconocimiento a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales por el trabajo —como acá se ha expresado y lo ha mencionado el presidente de la bancada del oficialismo—, lo ocurrido sobre este tema es un reconocimiento al no trabajo.

Este proyecto de ley, que trata justamente de la creación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente desdobra el funcionamiento de la propia Cámara. Porque hoy contamos con una Cámara Nacional de Casación, cuyo funcionamiento será absorbido por una Cámara Federal de Casación, que tiende a absorber materias de competencia de índole estrictamente federal. Y para otro tipo de materias se crea esta Cámara Nacional en lo Correccional y Criminal para la Capital Federal.

Los argumentos que se esgrimen desde el oficialismo se refieren a tratar de dar celeridad a las causas, en el marco —como acá se ha dicho— de un fortalecimiento institucional. La verdad es que, si se trata de fortalecimiento institucional, esto deja mucho que desear.

En cuanto a la creación de esta cámara, estas disposiciones ratifican en parte lo instituido por el artículo 8° de la llamada “Ley Cafiero”. Esto es, se viene a convalidar la

transgresión al artículo 129 de la Constitución Nacional. En este sentido, me permito recordar que el artículo 129 de la Constitución Nacional establece claramente que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y facultades propias de jurisdicción. Vale decir que si hablamos de facultades propias de jurisdicción, el ejercicio pleno de esta facultad de jurisdicción tiene que ver con la capacidad que debe tener todo gobierno autónomo de fijar las pautas de sus propias políticas jurisdiccionales.

Aquí estamos creando una Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional para la Ciudad; estamos modificando la composición actual de la Cámara Nacional de Casación Penal y creando diez cargos —diez espacios— para ser repartidos en tres áreas distintas. Lógicamente que esto es vulnerar la autonomía. Acá se está vulnerando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; se la vulnera porque se transgrede el artículo 129 de la Constitución Nacional.

Creo que no es una cuestión menor y que merecía una discusión mayor. Porque se trata, lógicamente, de avasallar competencia y jurisdicción, cuando este propio Congreso ha tenido la ocasión de ratificar el traspaso gradual de competencias en diferentes materias de índole penal, del gobierno federal al gobierno de la Ciudad. Y esa transferencia de competencias se daba en un proceso de normalización, en la búsqueda, justamente, de la plena autonomía que le concede la Constitución nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunos dicen que con la creación de estas cámaras se facilita el traspaso de competencias pero, en realidad, es un avasallamiento a la autonomía. Se diseña un modelo para llevar adelante un estilo de manejo de la Justicia. ¿Por qué? Porque no se trata de la creación de juzgados o salas, sino de la institucionalización de una Cámara nacional en el ámbito de una jurisdicción que cuenta con plena autonomía legislativa y de jurisdicción.

Por otro lado, también es importante señalar lo que ha especificado la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Estenssoro, cuando advertía que debemos tener en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, en 2007, fijó su Código de Procedimientos en Materia Penal y que no tiene recursos de casación. Entonces, estamos generando un entramado de cámaras, quitándole sustento a la propia Ciudad de Buenos Aires, que ha especificado con las normas y el propio poder que le otorga la legislatura local el estilo y el manejo de la justicia que pretende y que tiene derecho a tener.

Si se trata simplemente de la agilización de causas penales, me parece que no fue el mejor argumento; porque era suficiente con la creación de nuevas salas para descomprimir y tender a la agilización sin romper la estructura judicial que hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires. Señalo esto como una primera parte y como un esbozo somero, debido al poco tiempo que ha tenido la comisión para deliberar y profundizar estos temas.

En segundo lugar, nosotros observamos un artículo sobre el que también me referí en la comisión. El artículo 7º del proyecto establece justamente que el Consejo de la Magistratura remitirá la terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional en un plazo de 120 días. Sin embargo, en su parte final, este artículo establece que, en los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de la causa. Creo que este es un agregado absolutamente peligroso, porque aquí se hace hincapié en la necesidad de establecer un procedimiento abreviado para la designación de jueces. Es una norma ambigua que violaría el artículo 114 de la Constitución, que establece que es el Consejo de la Magistratura el que tiene entre sus atribuciones seleccionar, mediante concurso, los postulantes para el cargo de magistrado.

En la comisión se argumentó que no se trata de procedimientos, sino de un plazo abreviado. En ese sentido, hay que tener cuidado, porque aquí se habla de “procedimiento” y no de “plazo”. El plazo tiene que ver con el tiempo y el procedimiento tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Justamente, tiene que ver con fijar una mecánica, unos pasos razonables y un límite prudencial para la propia designación. Es decir, estamos transgrediendo también el artículo 114 de la Constitución. Creo que esto no es claro, porque confunde y desvirtúa la propia esencia de la ley de creación del Consejo de la Magistratura, que también requiere una mayoría especial para su modificación. Por eso, es un párrafo que directamente no debería estar en el proyecto.

También tenemos algunas observaciones o disidencias con respecto al artículo 11, cuando establece que los tribunales orales federales y la justicia de instrucción federal pasarían a resolver las cuestiones concernientes a los juzgados de ejecución. Los juzgados de ejecución funcionan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fueron muy eficaces para el fin perseguido. Entonces, se desnaturaliza la esencia del propio juzgado cuando es absorbido por estos tribunales orales.

En verdad, es poco el tiempo que se ha tomado la comisión con relación a la envergadura del tema, consistente en crear una nueva cámara dejando sin efecto la anterior. Una cuestión de esta naturaleza merecía mayor tiempo de análisis. En efecto, no fue posible discutir a fondo esta cuestión y escuchar a los especialistas. Por lo tanto, quiero dejar señalado, en representación del bloque de la Unión Cívica Radical, que no vamos a acompañar este proyecto. Se trata de una iniciativa que avasalla la autonomía del gobierno de la Ciudad y que resquebraja no sólo la autonomía, sino que pone en tela de juicio principios de raigambre constitucional como son las atribuciones que tiene el propio Consejo de la Magistratura para establecer los mecanismos de designación y remoción.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: en primer lugar, este proyecto ingresado el 8 de mayo tiene una trascendencia enorme para todos los ciudadanos que están sometidos a un procedimiento y tienen sus juicios ante el Tribunal de Casación y para aquellos que tienen en trámite algún recurso ante dicho tribunal.

A través de esta iniciativa se pretende crear —si yo no entendí mal, porque es bastante complejo entender todo lo que estamos haciendo hoy; si me equivoco, pido humildemente se me corrija— una Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. O sea, estamos por crear una cámara para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como si creáramos en la provincia de Salta un Tribunal de Casación en Salta; o en San Luis, en Córdoba, o en Río Negro. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos actuando, en este momento, como legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para crear una cámara.

En ese sentido, tengo que reiterar los argumentos ya vertidos. Nosotros presentamos un proyecto muy sencillo y simple para resolver el problema de la “Ley Cafiero”, respetando plenamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y permitiendo que se solucione el problema paulatinamente, en la medida en que los actores puedan ir llegando a los consensos y acuerdos necesarios. En efecto, la norma deroga los artículos 7º, 8º y 10 de la Ley 24.588; el artículo 2º trata el tema de la policía; y yo voy a referirme al de la justicia. El artículo 3º dice que, hasta tanto la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires cree su propia justicia ordinaria, la justicia nacional ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. Es decir, la norma da por finalizada la etapa de intromisión en la autonomía que estamos teniendo hoy, y con ella evitaríamos el parche que fue la sesión de febrero, cuando

se aprobó un convenio donde se transfieren algunas competencias y jurisdicciones; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaría habilitada para crear sus tribunales, lo cual requerirá discutir los fondos con que se crean. Pero este ya es un problema entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno nacional y las provincias con relación a la ley de coparticipación nacional, que deberemos dictar algún día.

Mientras tanto, no podemos seguir avasallando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso me opuse al tratamiento sobre tablas de este tema y pedí que volviera a comisión; porque me parece que lo correcto para solucionar el problema, si esa fuese la intención —no quiero juzgar intenciones—, sería crear otra cámara federal de casación. Es decir, así como hay varias cámaras federales y muchas civiles y comerciales, habría otra cámara de casación federal para todo el país y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, dedicada al tratamiento de los temas con la competencia que tiene actualmente la Cámara de Casación. Eso es otra cosa. Yo estaría de acuerdo en crear otra cámara Federal y creo que podría ser el procedimiento correcto para no sacar al ciudadano del juez natural e ir solucionando paulatinamente el problema de las numerosas causas que tiene el Tribunal de Casación. Si no estamos creando dos cámaras de casaciones con competencias diferentes: una que tiene competencia solamente para algunos tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, la otra, que tiene competencia para todo el territorio nacional, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se elige alguna competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que va a la casación del Tribunal de Casación Nacional de la Capital Federal y otras competencias de jueces locales de la ciudad autónoma que van a la Cámara Federal. Esta es una verdadera desprolijidad, salvo que estemos dictando una ley a medida de algún problema, cosa que no debería ser así y espero que no sea así.

Hay demasiada premura y poco debate para solucionar el tema. Yo no tengo problema en que se le ponga horario a los jueces, me parece bien que trabajen. Así como no quieren pagar impuesto a las ganancias, así como sostienen una situación vitalicia, etcétera, también tienen la obligación de trabajar. Y tienen un buen sueldo, cosa con la que estoy de acuerdo; pero también tienen que trabajar lo suficiente. Pero esta ley está haciendo otra cosa: se mete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para solucionar el número de causas, cuando debió crearse otra cámara federal; dos cámaras federales, no una cámara local para la Ciudad Autónoma y una Federal para todo el país. Parece una ingenuidad, pero sucede que tienen competencias diferentes, tratan temas diferentes y puede terminar siendo una cosa peligrosa para la coherencia, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

El artículo 7° establece un plazo para que el Consejo de la Magistratura proponga los nombres y haga un procedimiento abreviado. Me parece muy bien. Es lo que nosotros proponíamos en la norma que tratamos la semana pasada, es decir, en la ley Pichetto: los interinatos cesan, por ejemplo, en noventa días; el Consejo de la Magistratura debe confeccionar una nómina de candidatos en treinta días y el Poder Ejecutivo deberá remitirlo al Parlamento en sesenta días. Entonces, en noventa días tenemos designados a todos los jueces, porque la Comisión de Acuerdos del Senado trabaja eficientemente, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en sus dictámenes que, en términos generales, salen por unanimidad. Esto lo tendríamos solucionado con la participación de todos. Sucede que ahora, como lo manda el Poder Ejecutivo, lo aceptamos; lo otro, como lo proponíamos nosotros, no lo aceptaban. Es contradictorio, incoherente, falto de calidad institucional. Es casi hasta... Bueno, no lo quiero calificar, pero me parece que deberíamos pensarlo.

Después se establece un procedimiento transitorio hasta tanto el Tribunal de Casación de la Capital Federal empieza a funcionar. En consecuencia, me parece que estamos ante una

legislación que crea innumerables dudas acerca de si se afectan los derechos constitucionales. Si queremos aferrarnos a la Constitución, al cumplimiento de la ley, y permitirle al ciudadano que tenga el debido proceso con el juez natural, debemos respetar las normas jurídicas que, en este sentido, son clarísimas en todo el universo. No hay discusión. El juez natural es el juez natural. Y acá estamos creando una forma de alterar, porque se va a alterar de hecho y de derecho, el juez natural.

A pesar del poco tiempo que hemos tenido para estudiar la norma, creemos que es inconveniente. Por ello, vamos a votar en contra. Votaríamos a favor la creación de una nueva cámara federal de casación, que respeta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y soluciona el problema que queremos resolver, el del número de causas que entorpece la prestación correcta y en tiempo del servicio de justicia.

Sr. Presidente. — Corresponde el uso de la palabra a la senadora Giusti, pero no está presente. Entonces, tiene la palabra el senador Cabanchik.

Sr. Fernández. — Perdón, señor presidente, ¿podría decir cuántos oradores hay anotados?

Sr. Presidente. — Sí.

La senadora Giusti —que no se encuentra—, el senador Cabanchik, y las senadoras Negre de Alonso y Estenssoro.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: yo voy a hablar sobre el C.D.19/08, que se va a presentar después.

Sr. Presidente. — Está en tratamiento el 20/08.

Sr. Cabanchik. — No había quedado claro si era el 19 ó el 20, porque estaban todos conectados, ya que todos tienen que ver con la justicia.

Sr. Presidente. — Cámara de Casación.

Sr. Cabanchik. — Disculpe.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a hablar sobre la creación de la Cámara de Casación.

Comparto lo que expone el miembro informante en cuanto a que hay que dar solución al colapso judicial. También mencionó el miembro informante el criterio de la Corte. Efectivamente, a partir del fallo “Casal”, que establece la obligatoriedad de la doble instancia y, por otro lado, del criterio en el fallo “Di Nunzio”, donde se amplía la competencia al tribunal constitucional, porque establece que se abre la posibilidad de recurrir en los casos en que hay perjuicio irreparable —por ejemplo, la prisión preventiva—, es de público conocimiento que el Tribunal de Casación Penal está con una sobrecarga de causas, casi al borde del colapso.

Entonces, compartimos la situación fáctica y el diagnóstico. No compartimos las soluciones que se plantean para este tema. Como ya lo dijeron el senador Rodríguez Saá y el vicepresidente de la comisión, representante de la Unión Cívica Radical, en realidad, uno se plantea si es conveniente crear una nueva cámara y dividir las competencias, con la problemática constitucional que acá se ha expuesto perfectamente, o si hubiera bastado a esos efectos con agregar salas al tribunal actual. En este caso, se podría hacer una reorganización de las causas, como está previsto. Esto es algo que ya hicimos con la Ley 26.086, que aprobamos en el año 2006, casualmente a los efectos de dinamizar la Justicia —en ese caso, nacional— de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no sería la primera vez que lo hacemos para dar un servicio al justiciable.

Pero no creemos conveniente que se haga de la forma en que el proyecto lo ha planteado. En primer lugar, esto me trae bastante confusión. Al respecto, hemos confeccionado un cuadro comparativo para tratar de entender la cuestión, pero debo confesar

que me cuesta bastante entenderla. En este diagrama [lo exhibe], vemos cómo están conformados actualmente los tribunales penales federales y nacionales; y en este otro [lo exhibe], vemos como quedarían después, si logra ser sancionado este proyecto de ley. Tengo algunas dudas, porque le cambiamos el nombre a la Cámara Federal, pero no nos referimos al Tribunal de Casación Penal. Esta era una de las cuestiones que le quería plantear al presidente de la Comisión o, en su defecto, al vicepresidente, pues en este momento no se encuentra presente el presidente. Se modifican competencias y nombres y, además, no se aclara debidamente quiénes son los integrantes del tribunal constitucional.

Las preguntas que tenía para formular no eran para molestar, como tal vez lo interpretó el senador Pichetto. Me preocupé en estudiar la temática —a pesar de que no soy miembro de la Comisión—, pero me cuesta compatibilizar toda esta información para ver cómo quedará la organización de la justicia en este sentido. Estas son las dudas que tenía para plantear y que parecía que causaban molestias; pero no actué de mala fe, pues creemos que podemos hacer aportes desde el lugar que ocupamos. Como profesionales del derecho que somos podemos aportar ideas para mejorar el proyecto y la justicia de la República Argentina; pero siempre dentro de los marcos constitucionales y respetando el derecho de defensa en juicio.

La Ley 24.050 establece que el Tribunal de Casación Penal fija los criterios jurisprudenciales a través de fallos plenarios. Y no se trata de una cuestión menor, porque estamos hablando de criterios en materia penal y de situaciones en las que está en juego la libertad de las personas en materia de derechos humanos. Entonces, de sancionarse el proyecto, existirían dos tribunales: uno para la ciudad de Buenos Aires y otro para el interior del país. En consecuencia, cuando sean convocadas las salas de estos tribunales para fijar criterios y unificar jurisprudencia, habrá dos ramas. Por lo tanto, no es una cuestión menor nuestro planteo acerca de por qué se crea una cámara y no se crean más salas en el actual Tribunal de Casación.

Además, hay que tener en cuenta que existe un colapso en virtud del cambio de criterio de la Corte, ya que está dictando fallos sobre la base de lo resuelto por los tribunales internacionales, situación que creo que fue mencionada por el senador Marín. Esto produjo que ciertas áreas de la justicia estén al borde del colapso, si es que ya no han colapsado. Entonces, habrá que adecuar el organigrama judicial de tal forma que tenga una estructura orgánica, porque el sistema queda descompensado si se analizan todas las cuestiones que estamos planteando.

Comparto lo que acaba de manifestar el senador Rodríguez Saá en el sentido de que los jueces deben trabajar. Siempre planteé que los jueces deben pagar impuesto a las ganancias. Eso lo vengo expresando desde que se debatió la emergencia económica en el seno del Parlamento por enero de 2002; siempre he apoyado iniciativas en tal sentido. Además, en las audiencias públicas siempre les hemos preguntado a los futuros miembros de la Corte acerca de si los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias. En ese sentido —reitero—, tienen que trabajar.

Se trata de un problema de plazos y de criterios de interpretación de los plazos con relación a los jueces penales. La jurisprudencia entiende que sus plazos no son perentorios sino meramente ordenatorios. Por lo tanto, eso también contribuye al colapso que actualmente sufre la justicia.

Finalmente, señor presidente, quiero compartir el tema de las competencias de los tribunales para la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, nosotros debemos avanzar en una legislación que nos haga transformar en operativa la reforma de la Constitución de 1994. Además, también debemos hacerlo por una cuestión federal, porque los tribunales nacionales

son sostenidos por toda la República Argentina a pesar de que atienden únicamente cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya lo dijimos en 2006 y también lo sostuvimos en el seno de la Comisión de Legislación General cuando nos visitaron los miembros de la Cámara Nacional Laboral *in totum* y de la Cámara Nacional Comercial, quienes vinieron a plantearnos que había un colapso de causas y que necesitaban la sanción de una ley que las redistribuyera. Consecuentemente, creemos que hay un avasallamiento de la autonomía y se hiere al federalismo: la Ciudad de Buenos Aires tiene sus tribunales con sus competencias *in totum* y ellos son los que sostienen, organizan y legislan para su Justicia. Si nosotros seguimos aumentando y agrandando este monstruo de tribunales sólo para atender la Ciudad de Buenos Aires —pero, además, sostenidos con recursos de toda la Nación Argentina— no hacemos más que desconocer la voluntad del constituyente, que ocupó ese lugar en virtud de una mayoritaria elección del pueblo argentino, quien cuando votó a favor de la reforma constitucional, lo hizo por determinados puntos, entre otros, para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera verdaderamente autónoma en ese sentido.

Por lo tanto, creo que hacemos más constitucional y dinámico el proyecto y no habrá colisión de normas ni de criterios si creamos salas. Además, también lo haremos más federal, porque avanzamos en un camino para completar a través de la legislación lo que quiso el constituyente de 1994, que no es otra cosa que lo que quiso el pueblo argentino cuando votó a favor de esa reforma constitucional. En consecuencia, si estas consideraciones no son atendidas, el Grupo Parlamentario Federal, que represento, no va a acompañar este proyecto de ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Las exposiciones de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra han sido bastante claras.

Queremos solucionar un problema cierto: agilizar el acceso a la Justicia y los procesos de quienes esperan sentencia. Pero lo cierto es que, tal vez con un buen fin, estamos dándole una solución que no es buena. Digo esto porque, por un lado —como se ha dicho—, se avasalla la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y se va a contramano del proceso de transferencias penales y judiciales que este Senado ha ido legislando. Mientras tanto, por el otro, no se resuelve el problema de esta manera, ya que, tal vez, lo que correspondería no es crear una Cámara de Casación para la Ciudad de Buenos Aires, sino más salas para la Cámara de Casación Federal, o bien dos salas. Más aún, creo que hasta correspondería que este proyecto volviera a comisión. Les pido que pensemos sobre esto último, porque ustedes saben que, en algunas provincias, existen cámaras de Casación, y, en otras, no. O sea que no todas las provincias tienen esta institución. ¿Por qué, entonces, obligar a la Ciudad de Buenos Aires a tener una Cámara de Casación que va en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimientos, que ya ha sido sancionado por la Legislatura de la Ciudad? Como ustedes saben, cuando se designan funcionarios o se crean organismos temporarios, es muy difícil dar marcha atrás y modificarlo después. Entonces, vamos a hacer un parche que enmarañará más la Justicia y la hará todavía más lenta.

La competencia de la Cámara Federal y la correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a ser clara. Así, por intentar solucionar un problema, se creará un caos jurídico aún mayor. Mi propuesta —y en ese sentido quiero hacer una moción de orden— es que reflexionemos sobre el tema ya que muchos señoras y señores senadores probablemente no hayan tenido el tiempo debido para analizar el asunto.

Es cierto que hay que dar una solución al problema de la Cámara Nacional de Casación, pero no creando una nueva Cámara que la ciudad no ha pedido ni necesita. Lo que se requiere es desagotar la Justicia Federal nacional. Entonces, si existe una posibilidad

mejor que provenga de la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que asumir la obligación de revisar dicha sanción —ese es nuestro rol: la revisión de proyectos provenientes de la Cámara baja— con el tiempo suficiente. Eso sería mejor para quienes esperan una justicia rápida. Por otro lado, no resolveríamos el problema poniendo un clavo en lugar de otro.

Me imagino que el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente al oficialismo va a entender nuestros argumentos. En ese sentido, quiero pedir que se vote una moción de orden y un pedido de reflexión, porque ello implicaría no sólo dar al tema el análisis que el asunto amerita, sino seguramente proponer una mejor solución que la sugerida por la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: no quiero entrar en la problemática de la Capital Federal en lo que hace a sus legisladores y a sus respectivas posiciones, aunque ese es el planteo que se presenta y no tanto el de la autonomía; autonomía que —en mi opinión— no se ve vulnerada en ningún aspecto.

Hemos escuchado con atención las posiciones de los distintos bloques, algunos con subjetividades que no compartimos. Pero en lo que hace al tema de fondo, que es ver cómo se soluciona el tema de las demoras y el de las apelaciones en las distintas causas, resulta bien complementado con el proyecto en consideración y, por lo menos, trata de encontrar una solución al problema del que todos hablan. Aquí, en la calle y en la televisión, uno puede ver a distintas personas y colegas hablar de las demoras en la Justicia. Ahora, cuando se plantea un proyecto que de alguna forma trata de reparar esos problemas —quizás no sea lo ideal—, nos encontramos con objeciones de distinto tipo; por ejemplo, objeciones vinculadas con que se trata de forma inmediata o con que es necesario consultar a técnicos, circunstancia esta última que no me parece mal.

No obstante, quiero dejar aclarado que se trata de un código procesal y no de un código de fondo. Indudablemente, el objetivo buscado y querido es, pura y simplemente, ver cómo se reducen los plazos judiciales, a efectos de que los distintos ciudadanos que sean llevados a la Justicia puedan tener una resolución en tiempo y forma; no existe ningún otro criterio. Es muy cómodo venir acá y hablar, o traer especialistas que nos digan qué es lo mejor técnicamente, mientras el resto de los ciudadanos espera que se les brinde un servicio de justicia eficaz.

No coincido con el señor vicepresidente de la Cámara. Me parece que hizo una acusación a la comisión de la que no creemos ser merecedores, aunque no comparta el criterio que hay sobre la definición del problema.

Respecto de uno de los planteos presentados —particularmente, el de la violación de la autonomía de la Capital Federal—, reitero que el proyecto transfiere la competencia en materia de recursos de inconstitucionalidad y de revisión de un tribunal nacional —la actual Cámara Nacional de Casación Penal— a otro tribunal de competencia también nacional. Me refiero a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que se crea en este proyecto.

En lo que se refiere a la competencia de los delitos de menor gravedad, comprendidos en la Ley 26.357, que aprobó la transferencia progresiva de competencias penales, la cláusula primera de dicho convenio establece que esos delitos serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes, con excepción de la competencia federal.

— *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la Nación, senador Juan Carlos Romero.*

Sr. Marín — Hay dos aspectos que planteaba una colega: uno de ellos es el referido a la competencia que da la Constitución nacional desde el año 94 a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando que ese tema se trate en concreto, que los legisladores de la Capital planteen que se haga esta transferencia.

Diría que este problema que existe con relación a este planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el mismo que el relativo al de la coparticipación, que también está incluida en la Constitución de 1994. Todos hablamos de que hay que tratar el tema, pero nunca se trata. Ahora, cuando se quiere sancionar una ley como la que está en consideración, por colación se traen problemas que —a mi criterio— no hacen estrictamente al fondo de la ley.

El artículo 7° que ha sido señalado, no quita ninguna facultad al Consejo de la Magistratura. Tiene razón el señor senador por San Luis en que lo único que se determina es que se fije un plazo para que se expida con más rapidez. Creo que esto no significa que se vulnere ni que se quite competencia al Consejo de la Magistratura, sino que se le dice que se obre con rapidez, porque es lo que hace falta.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: antes de que se vote, quería hacer una mención muy breve. Estamos tratando la creación de la Cámara de Casación Penal Nacional. La pregunta es qué tiene que ver con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que no estaba en el recinto, escuché detenidamente a la senadora Estenssoro en mi oficina, mientras tomaba un té. Quiere meter un tema que no tiene nada que ver. Además, esta Cámara tiene como destino la atención de la problemática de la alzada superior en materia penal de las cuestiones del interior.

Acá no hablamos de estar en contra de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy de acuerdo con que se debe abrir un debate respecto de la transferencia de servicios; de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir hacia una autonomía plena; de que debe tener su Justicia. Ahora tiene solamente la Justicia correccional —de menor cuantía, como se la denomina habitualmente—, que sólo se ocupa de las contravenciones y faltas que ocurren en la ciudad. Debe tener una Justicia plena: Civil, Criminal y Correccional, con sus cámaras respectivas de apelación, para garantizar el derecho a la defensa. En todo esto no tiene nada que ver la Cámara de Casación Penal, absolutamente nada que ver. Estamos creando una nueva Cámara para mejorar el sistema de la alzada nacional —la máxima alzada—, porque es como si estuviéramos en la última instancia. La finalidad es brindar un mejor servicio a los ciudadanos y, como dijo el miembro informante, senador Marín, dar mayor celeridad a la Justicia.

Con estos fundamentos, queremos que se ponga a votación la propuesta de creación de la Cámara de Casación Penal en una sola votación, adelantando que no vamos a aceptar modificaciones.

10. Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Romero). — Entiendo que previamente hay una moción de orden de vuelta a comisión formulada por la señora senadora por la Capital...

Varios señores senadores. — Una moción de reflexión... (*Risas*)

Sra. Estenssoro.- Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Hice una moción de orden para que el proyecto vuelva a comisión, porque creo que se han hecho mejores propuestas que no vulnerarían la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Justicia de la Ciudad de

Buenos Aires, que no prevé una Cámara de Casación en su organización.

Como en el debate han aparecido propuestas que mejorarían....

Sr. Presidente (Romero). — No se puede fundar. Se pone a votación...

Sra. Estenssoro. — Pedí la vuelta a comisión del proyecto para que podamos analizarlo en mayor profundidad.

Sr. Presidente (Romero). — Se va a votar...

Sra. Negre de Alonso. — ¿Qué vamos a votar, señor presidente?

Sr. Presidente (Romero). — Vamos a votar la moción de orden por signos.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Romero). — Resulta negativa la moción de vuelta a comisión.

11. CD 20/08: Creación de una nueva cámara con funciones de casación en materia penal (Continuación)

Sr. Presidente (Romero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general y en particular en una sola votación.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa y 17 por la negativa.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 2.* ⁵

Sr. Presidente (Romero). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. ⁶

12. C.D. 19/08: Procedimiento para designación integrantes tribunales orales en lo Criminal Federal

Sr. Presidente (Romero). — Corresponde considerar el expediente C.D. 19/08, siguiente en el orden.

Tiene la palabra el senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: obviamente, este es un tema que ha tenido un primer debate cuando creamos el sistema de subrogancia de la Justicia federal, en particular, el correspondiente a los tribunales orales federales.

Este asunto había sido abordado por la Cámara de Diputados y, en su redacción, abarcaba la situación de las cámaras nacionales federales. Eso hizo que nosotros lo debatiéramos en un segundo estadio, por dos motivos: primero, porque la sanción del proyecto en Diputados no la habían tenido los señores senadores en el momento que tratamos la ley de subrogancia en general; segundo, porque efectivamente estábamos esperando la creación del tribunal de la segunda Cámara de Casación, cuya aprobación ha tenido lugar en el día de la fecha.

Una sola aclaración, porque este tema ya lo hemos debatido. La vez anterior, cuando debatimos el tema de la subrogancia, hubo casi acuerdo por unanimidad. Tuvimos una diferencia con el bloque de la Unión Cívica Radical y con algunos senadores que efectivamente adoptaron la misma postura porque no le incorporamos al sistema de subrogancias el tema del plazo. Si efectivamente entre ese abordaje y este hay una coherencia, en esta votación, deberíamos alcanzar prácticamente la unanimidad. ¿Por qué digo esto? Porque este sistema de subrogancia, a diferencia del anterior y por cuestiones que adelantó el presidente de mi bloque, está circunscripto al inicio y finalización del juicio, con

⁵ Ver el Apéndice.

⁶ Ver el Apéndice.

lo cual el motivo de la subrogancia está más que justificado, así como el respeto constitucional al mismo juez.

El sistema que se prevé es muy claro al indicar que se integrarán los tribunales orales en lo Criminal Federal de la jurisdicción, teniendo prelación los jueces de la ciudad más cercana, salvo que haya conocido previamente la causa elevada a juicio y esté comprometida su imparcialidad. El segundo artículo hace referencia a que, de no resultar posible, se va al mismo sistema que hemos aprobado la semana pasada.

Dos temas debatidos: participación del Consejo o no, y una referencia que hizo el senador Rodríguez Saá. Efectivamente, la reflexión que hizo sobre el expediente que recién terminamos de votar tiene que ver con el apego constitucional al sistema de designación de los jueces titulares.

Plazo abreviado en la designación de los jueces titulares: o no: no está en discusión ni en cabeza de quien les habla cuestionar que en ese sistema tienen que participar el Consejo de la Magistratura —porque está previsto, para menguar la facultad discrecional, tomando exámenes—, el Poder Ejecutivo —que debe elevar la terna— y el Senado —que tiene que prestar acuerdo—.

En el sistema de subrogancia, por su condición auxiliar, complementaria y transitoria, recurrir al Consejo de la Magistratura y poner un trámite similar sería replicar un procedimiento que está previsto para la designación de los jueces titulares. Estoy diciendo lisa y llanamente que, del fallo “Roszas” o de cualquier otra interpretación, no es que se excluya al Consejo de la Magistratura; ese fallo no excluye al Consejo de la Magistratura. Tenemos que prever un sistema auxiliar, transitorio y de urgencia. Por eso se prevé un sistema de corrimiento, porque estamos en una causa que está en trámite y no podemos demorar *sine die* para designar un juez titular. Lo demás ha sido debatido sobreabundantemente. En concreto, estamos complementando el sistema de subrogancia.

Salvo que haya alguna cuestión en particular, en virtud de la posición que adoptaron los señores senadores a la hora de votar la subrogancia general, deberíamos adoptar una decisión similar. Recuerdo que la única diferencia que tuvimos fue que en los jueces subrogantes anteriores no teníamos plazo. Si esa, efectivamente, es la única diferencia que tenemos en la actualidad, eso está superado por la naturaleza jurídica de esta subrogancia. En definitiva, propongo el voto del dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: respecto de la imposición del tratamiento de este tema, aquí se da algo similar a lo que ya nos ocurrió con el tema anterior y a lo que nos va a ocurrir con los otros tres temas que están en consideración.

He interpretado, según lo que nos viene sucediendo en los últimos meses —para mí, los primeros de gestión como senador— y lo que particularmente se ha dicho aquí, que hay algunas cuestiones que, en su tratamiento y su resolución, no responden a la sana consideración y a la disposición de dar al debate y al estudio el tiempo que necesitan. Me da la impresión de que si aquí nos explayáramos, de que si estuviésemos en condiciones de hacerlo considerando el tecnicismo que implica esta cuestión, de todos modos, el asunto pareciera que no tiene trascendencia.

Se ha dicho respecto de estos cinco temas que se introdujeron en el debate de hoy —nos enteramos prácticamente ayer del asunto y de los tiempos que teníamos para abocarnos a su estudio— que era imprescindible dar más tiempo a su tratamiento. En ese sentido, se habló aquí de una semana como plazo razonable. Sin duda que no es un gran tiempo, pero si existe un compromiso, hay que dedicarse a intensificar las horas para

avanzar. Lo cierto es que se ha descartado esa consideración.

También se ha dicho aquí como fundamento sobre la necesidad de tratar este paquete que es necesario mejorar la Justicia. En este caso, suplir este bache que tenemos en la ley para resolver las cuestiones de las subrogancias y que, como es así, hay que tratarlo. Eso sería como si hubiera urgencia para levantar una casa: hay que hacer los cimientos, las paredes y el techo rápido porque es urgente disponer de ella para habitarla. Nadie puede negar que la Justicia tiene problemas de falta de celeridad y también de eficiencia en el resultado del servicio que presta, pero creo que no está bien aceptar pacíficamente el tratamiento de estas cuestiones con la urgencia que se impone.

Con el respeto que merecen cada senador y el Cuerpo, como senador de la oposición siento que si no reflexionamos respecto de la necesidad de jerarquizar el tratamiento de las cuestiones que se nos imponen, nos privaremos de hacer ese esfuerzo —entre otros debidos, que hacen falta para que la institución recupere el prestigio que necesita para poder seguir llevando adelante la gestión pública con el objeto de lograr que se achique este divorcio inmenso que hay entre la población y nosotros—.

Creo que es malo el papel que hacemos al aceptar con ligereza que, como los temas imponen brevedad, nos debemos privar del tiempo mínimo necesario para tratarlos.

Respecto a las subrogancias, voy a rectificar al miembro informante del oficialismo en cuanto a nuestras objeciones. Además, también se suma el modo en que se apela en este proyecto a la nómina de conjueces por parte del Poder Ejecutivo.

Así mismo, debe considerarse, y tenemos que hacernos responsables —no hago aquí una cuestión de partidos—, que estamos legislando con la urgencia del 24, por decirlo así, que es el plazo que nos ha otorgado la Corte Suprema de Justicia, ya que vence ese día.

Sin embargo, al respecto, quiero decir que siempre hubo una solución al problema de las subrogancias. Por eso, si a esa fecha no estuviera esta ley sancionada, seguramente la Corte Suprema sabría resolver la situación a través de la aplicación de los sistemas mixtos que ha venido empleando desde hace un siglo. De modo que, aun aceptando esta situación —no es mi caso— por una imagen de eficiencia —que no comparto a este precio—, no creo que la Corte no resuelva el problema, tal como lo ha hecho antes.

Y si bien el tema de la manda que nos ha impuesto la Corte —como dijo el miembro informante la otra semana— nos obliga o impone el tratamiento de esta cuestión, de ninguna manera implica que si no estuviera sancionada la norma, vamos a caer en el escándalo de tener juzgados vacantes.

— *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.*

Sr. Vera. — Por lo tanto, como nosotros hemos debatido bastante esta cuestión, desde el punto de vista del bloque de la Unión Cívica Radical, obran dos cuestiones.

La primera es que valen los argumentos del otro día —de la sesión anterior—, con respecto a las subrogancias que tratamos y que aprobó el Cuerpo —no nosotros—; y en segundo lugar, que si algún valor tiene el gesto, pido con la consideración que merecen cada senador y esta Cámara, que reflexionemos acerca de hasta cuándo vamos a vernos compelidos por el argumento de la urgencia —que es verdad a medias, quizás—, para tratar, aprobar y compartir en el recinto cuestiones graves para la República. La urgencia nos priva del tiempo de tratamiento necesario, y, además, si se programan bien las cosas, tenemos todo el necesario para tratar estas cuestiones.

Por estas razones, el bloque de la Unión Cívica Radical no podrá acompañar esta iniciativa. Y digo "no podrá" porque, en verdad, ¡qué importante hubiera sido poder construir

las soluciones que va demandando la sociedad en conjunto, más allá de las diferencias de organización que tenemos con estas herramientas partidarias y, en este caso, de mi bloque!

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: lamento que mi colega, miembro informante y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Fernández, simplemente tenga en cuenta las objeciones que formula el bloque de la Unión Cívica Radical, porque estudié mucho para la sesión pasada. Leí y escudriñé el fallo "Rosza", el voto de la mayoría, el del doctor Fayt —que agregó a la mayoría pero que fue por su propio voto— y fundamenté por qué votábamos en contra si no se aceptaba nuestra propuesta.

Pero parece que el Grupo Parlamentario Federal al que represento no es tenido en cuenta porque, con el respeto que le tengo a nuestros colegas de la Unión Cívica Radical, el senador Fernández sólo dijo que como la Unión Cívica Radical se oponía por tal cosa —que era el plazo—, ellos tenían que votar a favor de...

Sr. Fernández. — ¿Me concede una interrupción, señora senadora?

Sr. Presidente. — El senador Fernández le solicita una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. — Sí, le concedo la interrupción.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: indudablemente, debo hacer una aclaración. Hice referencia a la Unión Cívica Radical porque fue el partido con el cual efectivamente se generó una discusión. Ellos hablaban de funcionarios y, en algún momento, uno de los reparos había sido que, por un lado, se hacía la nómina y, por otro, no se ponía plazo.

No hice referencia a la exposición de la senadora Negre de Alonso, a quien respeto y le reconozco prestigio para hablar también de este tipo de temas, porque me pareció absolutamente innecesario recordar lo que ella dijo. Incluso, ella tuvo reparos respecto del fallo "Rosza". Al respecto, conversamos acerca de que se trataba de una sentencia sobre la que la hermenéutica permitía efectuar dos o tres interpretaciones.

No quise hacer una omisión intencional; al revés, hice una referencia casual y puntual, porque los radicales fueron casuísticos en el debate.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como veo que el miembro informante recuerda, simplemente voy a hacer conocer el sentido de nuestro voto.

Sr. Marín. — ¿Me concede una interrupción, señora senadora?

Sr. Presidente. — Señora senadora: el senador Marín le pide una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señora senadora: tanto usted como Rodríguez Saá siguen siendo compañeros.

Sra. Negre de Alonso. — Efectivamente, el senador Rodríguez Saá y yo estamos representando al Partido Justicialista de la provincia de San Luis. Por ese partido dignamente y con honor estamos sentados en nuestras bancas; y el pueblo de San Luis, tal como lo viene haciendo, nos ha elegido en las últimas elecciones.

Pero en este caso, tenemos formado el Grupo Parlamentario Federal, que es la segunda minoría en este recinto, y queremos que realmente se nos respete como bancada y que cuando alguno de nosotros habla en nombre del Grupo, sea tenido en cuenta.

Como el senador Fernández recuerda lo manifestado la semana pasada —él era el miembro informante en la reunión anterior y lo sigue siendo en esta—, simplemente me voy a remitir a los argumentos.

Nosotros cuestionamos dos puntos: en primer lugar, el plazo; y en segundo, siguiendo

el hilo conductor del fallo “Rosza”, la no participación del Consejo de la Magistratura en la formación de las listas de subrogantes.

Entonces, por los mismos argumentos y en pos de ser breve, si no se hace lugar a nuestra objeción, vamos a votar en contra este proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. — Señor presidente: es un tema sumamente interesante y trascendente. La nueva Constitución establece claramente: la separación de poderes, el control de los distintos poderes y, a su vez, la responsabilidad que tiene cada uno de esos poderes. Voy a ser lo más breve posible y, luego, voy a pedir la inserción del discurso.

La Corte dijo en su sentencia que la designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la Nación sigue la pauta constitucional; exige la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante la intervención del Senado.

En otra parte del fallo, el Alto Tribunal dice que todo sistema de designación encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político.

Para ser más claro, pido autorización para leer unos artículos de la Constitución. El artículo 99, en el segundo párrafo del inciso 4, que corresponde a la atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que este nombra a los demás jueces de los tribunales inferiores sobre la base de una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Esto es terminante, porque es la llave.

Mientras tanto —ha sido tomado por los senadores del justicialismo—, aparece el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, también dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, y dice así: "Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". En ningún momento se deja de lado la trilogía Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado.

En cuanto al artículo 114 del mismo cuerpo legal, se dice: "El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados...".

El inciso 19, al que hizo alusión el señor senador Fernández, es cierto que no menciona al Consejo de la Magistratura. Pero el artículo principal y determinante es el anterior, que yo he leído.

Lo que tiene que ponerse en claro es que el inciso 19 dice: "Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso...". Se refiere al receso del Senado. Pero en ningún momento acepta que el Consejo de la Magistratura no actúa.

En la primera lectura dije: "Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado". Es delicada la modificación que se ha hecho.

Es cierto, como dijo en determinado momento el señor senador Fernández, que la ley anterior, de creación y reglamentación del Consejo de la Magistratura, sí mencionaba al citado Consejo y que la ley posterior no lo hace.

Cuando la Corte Suprema hace su dictamen, lo efectúa teniendo a la vista claramente la norma constitucional. Entonces, salir del ámbito de los derechos del Consejo de la Magistratura, abre un camino para que, en cualquier momento, se declare la inconstitucionalidad de esta modificación. Y de ello podría ocurrir que se afectaran

relaciones jurídicas, sentencias que ya han sido dadas y no cumplidas.

A efectos de no dilatar más el debate, solicito autorización para efectuar una inserción vinculada con el tema del Consejo de la Magistratura

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: la semana pasada nosotros votamos en contra del proyecto de ley de subrogación —la Ley Pichetto-Fernández— y le formulamos varias objeciones.

En primer lugar, considerábamos que, en virtud del respectivo fallo de la Corte, le teníamos que dar participación al Consejo de la Magistratura. En ese sentido, creo que no se quiere entender que le podemos pedir al Consejo de la Magistratura que elabore una lista de candidatos mediante un simple llamado a inscripción, a efectos de seleccionar de entre los inscriptos.

No tenemos por qué someternos a un procedimiento similar al de selección de un juez, ya que en ese caso sí se trataría de una superposición. Por ejemplo, si tenemos la vacante, porque no hay propuesta —o ella no satisface al Poder Ejecutivo—, no le podemos pedir que nos mande una lista de suplentes confeccionada mediante el mismo procedimiento; sería una torpeza, una falta de racionalidad, una falta de inteligencia. Eso no es lo que planteamos acerca de la participación del Consejo de la Magistratura.

Daré otro ejemplo: ¿cómo va a hacer el Poder Ejecutivo para confeccionar la lista? Llamará a inscripción a través del Ministerio de Justicia; los abogados de la matrícula se inscribirán; se establecerá una comisión para preseleccionarlos a través del criterio que se disponga —verificará la validez de los títulos y demás—; y en el término de uno, dos o tres meses —según la celeridad que se quiera imponer— tendrá una nómina de candidatos. Por lo tanto, el mismo procedimiento podría emplear el Consejo de la Magistratura para elaborar esa nómina de candidatos, que debería ser más amplia que la de los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo; y de esa forma se cumplirían todos los pasos.

Esa sería la primera objeción, que es importante porque tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema y con el cumplimiento de la Constitución, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos la forma en que funciona el Consejo de la Magistratura.

Con relación al plazo, podemos decir que este no es único, sino que se trata de varios plazos. En primer lugar, ¿qué plazo tenemos para reemplazar a los jueces interinos que ocupan ciento setenta juzgados —la Corte Suprema de Justicia estableció un año—: tres meses, seis meses, un año o la eternidad? Eso no se quiso poner en la iniciativa, a pesar de que no era ninguna traba para el Poder Ejecutivo, sino, simplemente, una norma que ordena y sirve para mejorar el sistema institucional.

Al respecto, puede ser que la Cámara de Diputados modifique el proyecto; caso contrario no habrá plazos y, en consecuencia, el juez interino — respecto del cual la Corte dice que está mal designado— podrá seguir siéndolo durante meses o años, porque la norma no establece un plazo. O bien tendremos una nueva sentencia de la Corte; y deberemos tratar nuevamente aquí de subsanar lo que no pudimos o no quisimos solucionar.

El otro plazo es el de designación del subrogante. En este caso, está bien establecido que cuando termina la causa, finaliza su subrogancia. Pero se podría dar la siguiente hipótesis: está la lista de conjueces; se designa como juez subrogante a un camarista o a otra persona en cualquier lugar del país; y nunca se designa al titular, ya sea porque el Consejo de la Magistratura no quiere mandar la terna, porque el Poder Ejecutivo no la remite o porque el Senado no le presta acuerdo. Así, tendríamos un juez subrogante eterno, que fue preseleccionado por mecanismos más simples que los que las normas establecen en la

actualidad.

Entonces, no se trata solamente de un plazo, sino también de este otro al que acabo de hacer referencia. Por lo tanto, nosotros deberíamos establecer que los jueces subrogantes durarán, como máximo, un año en sus funciones y, en caso de emergencia, el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, la Cámara, el Senado o quien se quiera, podrá prorrogar ese plazo por seis meses más; esto es lo que hace al trabajo en Comisión y lo que nosotros pedimos que se discuta. Entonces, creo que el tema de los plazos es importante.

A continuación, voy a señalar otra observación. Desde ya, les pido disculpas, pero quiero decirles que a mí me afecta esta improvisación, porque me gusta trabajar, estudiar y contribuir a que las cosas se hagan bien.

Pues bien, estamos tratando hoy la misma norma que consideramos la semana pasada. Cabe aclarar que no me di cuenta, pero tampoco tuve tiempo de estudiarla mucho ni de participar en las reuniones de comisión para profundizar sobre esto. No sé por qué no pusimos en el proyecto “Y los otros tribunales orales”. ¿O se sabía que había un proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados y estamos en medio de una disputa entre ambas Cámaras, que después nos trae consecuencias en otros ámbitos? Si así fuera, se trata de una contienda que no debería existir. Pero lo cierto es que se trata de la misma ley, más allá de alguna sutil variante. No obstante, quiero decir que si dos semanas atrás se estaba tratando este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, por una cuestión de prolijidad institucional lo mejor hubiera sido sancionar una sola norma, abarcando toda la normativa.

Por último, debo hacer una reflexión que va dirigida al señor presidente del bloque del Frente para la Victoria, senador Pichetto, a quien le tengo mucho respeto. Lo que se ha aprobado en la iniciativa anterior es una Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si se sostiene que crear una Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, con competencia para dicha ciudad y con competencia sobre los tribunales ordinarios de la Capital Federal, cuando uno de sus artículos ordena y dice que “Estos son los tribunales de la Capital Federal” no afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se está en una equivocación o, de lo contrario, hay que leer mejor el texto.

El presidente de la Comisión de Legislación General nos ha pedido que votemos ahora a favor de este proyecto de ley, porque tendría el plazo del que hablamos antes. Es cierto que tiene uno de los plazos, pero le falta el otro y, también, el paso por el Consejo de la Magistratura.

Por estas razones, adelanto que vamos a votar en contra de la sanción de este proyecto de ley.

Sr. Presidente. — No hay más oradores anotados...

Sr. Cabanchik. — Sí, yo estaba anotado.

Sr. Presidente. — Perdón, señor senador, no lo tenía anotado.

Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: creí que este era un “ninguneo” más; se lo digo con toda simpatía. Señalo esto, porque antes el señor senador Fernández sólo mencionó al bloque radical. Por lo tanto, no sé si me quedo con el “ninguneo” del señor senador Fernández, que antes sólo se refirió a las objeciones del bloque radical relativas al plazo; o al del señor senador Marín, que incluyó sólo a los justicialistas disidentes. Por supuesto que somos todos amigos y macanudos, pero nosotros tenemos otras objeciones que no tienen nada que ver con el plazo al que se refirió el presidente de la Comisión. Entonces, voy a abundar sobre esas objeciones.

Nuestras objeciones tienen que ver con la constitucionalidad del proyecto que se

propone y, también, se vinculan con la constitucionalidad de la norma tratada en la sesión pasada. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo por mayoría, en el considerando 11 —y me voy a permitir leer textualmente— dice: "La designación de los magistrados integrantes de la rama de la Justicia Federal, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante la intervención del Senado". Es decir, los tres actores necesarios para el nombramiento de los jueces.

Más adelante, en el considerando 14, aclara: "La Constitución contiene un procedimiento de designación de magistrados en que resulta necesaria la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Este sistema no excluye la implementación de un régimen de jueces subrogantes". Es decir que, taxativamente, explícitamente, el fallo mayoritario de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación del caso "Roszas" dice, sin ninguna duda, que el Consejo de la Magistratura no está excluido de la necesidad de intervención según lo que fija la Constitución vigente.

El artículo 2° del proyecto en consideración habilita al Poder Ejecutivo a hacer listas de conjueces para subrogar cada tres años y sin plazos de caducidad. Esto sería el segundo argumento que objetamos. El primero —lo recuerdo— es el control de constitucionalidad. Al no tener un instituto diferente de la Corte Suprema de Justicia, es ella la que ejerce el control de constitucionalidad y, claramente, ha dicho que es inconstitucional tener una lista de conjueces para la subrogación con la sola intervención del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación y sin la participación del Consejo de la Magistratura.

Acabo de mencionar el segundo argumento, pero lo reitero una vez más. El artículo 2° del proyecto en consideración, tal como está redactado, indica que cada tres años la lista de conjueces será confeccionada por el Poder Ejecutivo y sin plazo alguno de caducidad. A estos efectos, el Poder Ejecutivo confeccionará cada tres años una lista de conjueces. Esa lista, entonces, puede incrementarse indefinidamente, ya que cada tres años se agregarían nuevos conjueces para las listas de subrogaciones.

Paso al tercer argumento por el que nos oponemos al proyecto en consideración. El senador Fernández hace la distinción entre las condiciones de jueces titulares y jueces subrogantes. Sin embargo, al momento de fallar los jueces en un tribunal, esas distinciones son irrelevantes; todos son jueces por igual. Ambos, titulares y subrogantes, son iguales a la hora de firmar los dictámenes judiciales. Entonces, es irrelevante que hayan entrado por una lista de subrogantes o no, y lo relevante es que adquieren la condición de jueces plenos de un modo no constitucional.

Por los tres argumentos mencionados —control de constitucionalidad, falta de plazo de caducidad en la composición de la lista de conjueces y, una vez obtenida la condición de juez, ser irrelevante formar parte de la lista de conjueces— es que nuestro bloque se va a oponer a la aprobación del proyecto en consideración.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. — Señor presidente: es tan claro lo que se dijo recién que se da la siguiente situación no legítima. El artículo 2° dice: De no resultar posible la integración mediante el procedimiento previsto precedentemente, se procederá a la designación de un subrogante por sorteo entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo.

Aquí hay un elemento clave que exige la Constitución, cuando señala que en todos los casos se tendrá en cuenta la idoneidad de los jueces. En ningún momento aparece quién es el que va a controlar. El juez subrogante es juez al momento que dicta sentencia, y el

Consejo de la Magistratura es el único que puede determinar la calidad, competencia y dedicación de los jueces subrogantes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Nicolás Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: voy a hacer una breve introducción y va a cerrar el debate el presidente de nuestro bloque. Se trata de algunas reflexiones en voz alta.

Cuando el fallo dice "no excluye al Consejo", no quiere decir "taxativamente", absolutamente nada de lo que dijo el senador. "Taxativamente" es "taxativamente". Y cuando dice "no excluye", lo dije yo. Esto significa que en el proceso auxiliar, complementario, puede estar el Consejo. Lo que ocurre es que en un sistema de urgencia de abordajes, de subrogancias por una carencia puntual debida, por ejemplo, al fallecimiento de un juez, el sistema que se prevé es distinto del sistema del Consejo.

Por otra parte, el Consejo tiene entre sus funciones examinar antecedentes de oposición, elevar una terna, menguar la discrecionalidad presidencial. Esa fue la razón de ser de la creación del Consejo, que, además, dice "taxativamente"; ahora sí, serán sus atribuciones seleccionar mediante concursos públicos los postulantes de las magistraturas inferiores y emitir propuestas de ternas vinculantes.

Como acá no se dan estos dos supuestos, nosotros entendíamos y entendemos que no sólo estamos respetando la norma constitucional, sino que, además, estamos respetando el fallo "Rosza", porque ese fallo, efectivamente, puede prestarse a interpretaciones, pero no significa que a partir de él haya un nuevo texto constitucional. El texto constitucional es el mismo. No quiero profundizar porque, además, es un debate que nos ha llevado mucho tiempo. Pero digo que la razón de ser del Consejo de la Magistratura, justamente, está prevista para el sistema de designación de jueces. No estamos violando la Constitución con este sistema de designación.

Dije que iba a hacer una pequeña introducción, porque hay urgencia para terminar el tema hoy.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: vivimos en el país de las sospechas. Lamentablemente, no pude estar en el debate del marco general de subrogancias que se votó la semana pasada. Siempre está el planteo de que acá existe una maniobra del Poder Ejecutivo, que va a apoderarse de los cargos de los subrogantes para torcer causas judiciales que puedan involucrar a funcionarios. En fin, esta es la historia de la Argentina: siempre mirar el lado oscuro, el cuestionamiento, la sospecha. Es una mecánica de la oposición que yo llamo de impugnación democrática, carente de construcción y, muchas veces —lo digo lamentablemente—, de profundidad en el contenido y en el estudio.

Hoy analizaba un artículo de opinión de un hombre que se dedica al tratamiento de temas de justicia. Se trata Adrián Ventura, del diario *La Nación*, un diario que tiene trayectoria en esta materia. No es fácil hacer periodismo judicial; es como el periodismo parlamentario, que requiere de una especialización. Por eso, los periodistas de la casa son respetados por los senadores, porque tienen una historia, una trayectoria. El periodista judicial también tiene un componente de especialización, de conocimiento del derecho.

Este periodista decía claramente que el proyecto es razonable; hablaba de que no se incluía a los secretarios. Digo que esto, lamentablemente, es falso porque, el proyecto habla de abogados de la matrícula, con lo cual, también, pueden ser incorporados los secretarios. Se decía que se excluye al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura puede ofrecerle al Poder Ejecutivo el listado de los que han sido calificados, aun cuando no hayan sido elegidos para la titularidad en los concursos. Indudablemente, el Consejo va a aportar la

lista con los mejores clasificados que quedaron en puerta. Esto lo hará el Consejo y el Poder Ejecutivo lo va a pedir, a recabar.

Con estas aseveraciones temerarias, dan la idea de que el Poder Ejecutivo va a mandar a cualquiera. Cualquier personaje nefasto que venga será nombrado juez subrogante, va a quedar en la lista de subrogantes. Esto tampoco es cierto. El Senado funcionará con un mecanismo igual al de la selección y al de la Comisión de Acuerdos. Habrá pedido de impugnación, se darán a conocer mediante edictos los nombres, la Comisión de Acuerdos hará la evaluación y, luego, quedará quien corresponda —si es que el perfil resiste el análisis y la evaluación de los propios senadores—. Pareciera que hay una *capitis diminutio* de nuestras propias capacidades: nosotros somos imbéciles de toda imbecilidad y vamos a avalar que venga el conde Drácula en la lista de jueces subrogantes y lo vamos a votar alegremente. Este es el planteo que surge de este debate, de un debate muy frágil, en donde no se profundiza claramente la cuestión.

Porque si analizamos cómo se va a confeccionar la lista de conjueces para los tribunales orales, primero está el mecanismo que establece la propia Constitución. Los tribunales orales en lo criminal de todo el país —voy a pedir permiso para leer, también— en caso de suspensión, recusación, excusación o vacancia de sus miembros, se integrarán con los jueces que hayan sido designados de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. Primero: los tribunales orales en lo criminal federal de la jurisdicción, teniendo prelación los jueces de las ciudades más cercanas. El primer tema es que para integrar un tribunal oral federal, si hay una vacancia por enfermedad o por muerte, primero se debe determinar si existe algún juez en la jurisdicción que sea miembro de un tribunal federal. Si ese juez está disponible, se lo designará subrogante.

El segundo caso es el de los jueces de Cámara, que pueden ser subrogantes —en ese orden—, siempre y cuando no hayan intervenido en cuestiones en la primera instancia, lo cual los obligaría a excusarse por el principio del derecho de defensa y de la posibilidad de que hayan preopinado en la causa. Por ejemplo, un dictado de una prisión preventiva, que fue en apelación ante la cámara y es ratificada por ésta. Indudablemente, la cámara ya tiene una posición tomada frente al juicio oral. Entonces, ese juez no podría actuar como subrogante. Pero si no intervino, puede integrar también el tribunal oral.

Es decir que, primero, se tienen en cuenta a los de la jurisdicción, a los más cercanos. En segundo lugar, a aquellos integrantes de la cámara que no hayan intervenido en cuestiones previas. En tercer lugar, a los miembros de los tribunales orales en lo criminal federal de la jurisdicción más próxima, o sea que pueden venir incluso jueces de otras provincias. Después, estará la lista que integrará el Poder Ejecutivo, que —como digo— va a pedirle informes al Consejo de la Magistratura sobre los postulantes que dieron examen y no pudieron entrar en las titularidades. Porque la ley no excluye eso; no lo dice, no lo niega. Así que, indudablemente, el Consejo participará en este tema.

Luego, está el rol de este Senado en el proceso de evaluación, que será idéntico. Lo dijo el senador Guinle en el debate anterior. Yo no vine, pero leí el debate y lo vi por “Senado TV”. El senador Guinle dijo claramente que la Comisión de Acuerdos va a funcionar con la misma mecánica y con el mismo procedimiento que en el caso de jueces titulares: habrá audiencias públicas, período de impugnación, elementos y preguntas que harán los senadores, y al que no sirva, lo sacaremos de toda lista.

Hay que poner el debate en el justo lugar y hay que salir de este pensamiento negativo, donde todo está mal, todo es oscuro, todo es trampa, todo es mugre. Porque, además, esto se lo trasladamos a la sociedad. La gente escucha y, lógicamente, va

construyendo una imagen muy negativa del sistema democrático e institucional de la Argentina, que no es real.

Con estos fundamentos, vamos a votar positivamente el sistema de subrogancias de los tribunales orales federales, en una sola votación.

Sr. Presidente. — ¿En una sola votación, en general y en particular?

Sr. Fernández. — En una sola votación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. — Señor presidente: por un lado, se me ha tratado de ignorante —que puede ser— y, por otro lado, se me ha imputado que tengo objetivos. De ninguna manera es así; trato por todos los medios de señalar que hay un enfoque totalmente distinto sobre una norma. Uno es el que tienen ellos y otro, el que se tiene de este lado. El tiempo va a decir, a través de la Corte Suprema de Justicia, quién tiene razón, y sin necesidad de calificar a nadie.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: no quise ofender a ningún senador en particular; dije que hay algunas valoraciones que no tienen profundidad. Tengo derecho a decirlo. No estoy ofendiendo a nadie; mucho menos, al doctor Massoni, con quien tengo un relación personal, además de haber compartido el Consejo de la Magistratura. Con esta aclaración, solicito que se pase a votar.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola votación.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna abstención.

Sr. Presidente. — Senadora Estenssoro: sírvase manifestar su voto de viva voz.

Sra. Estenssoro. — Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, resultan 38 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y ninguna abstención.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 3.*⁷

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.⁸

A continuación, se van a votar los pedidos de inserción.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.⁹

13. CD-21/08 y CD-22/08. Modificación del Código Procesal Penal de la Nación y otras cuestiones conexas

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: respecto de los expedientes C.D. 21 y 22/08, queremos pedir si se pueden tratar juntos. Tienen que ver con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Si hay acuerdo, podríamos avanzar un poquito más rápido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: estamos de acuerdo.

⁷ Ver el Apéndice.

⁸ Ver el Apéndice.

⁹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como es la misma temática, estamos de acuerdo.

Sr. Presidente. — En consecuencia, corresponde considerar en conjunto los dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se reforma el Código Procesal Penal de la Nación y en el proyecto de ley en revisión por el que se agiliza las actuaciones procesales en el ámbito penal y se consagra el derecho constitucional de todo imputado a que un pronunciamiento definitivo lo desligue, en un plazo razonable, del sometimiento a juicio penal. (CD 22 y 21/08)

Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: tanto el expediente CD 21/08 como el CD 22/08, tienen una relación directa, por lo menos en su concepto, con la creación de la Cámara de Casación Penal. Se trata de actuaciones procesales y, también, de recusación. Tanto en uno como en otro proyecto, se tiende a agilizar el procedimiento, facilitando y beneficiando la situación de quien está detenido en cuanto a la celeridad de la resolución de la causa por parte del Poder Judicial.

El expediente CD. 21/08 trata de evitar, de alguna manera, que los recursos pendientes de resolución, tanto de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impidan la elevación a juicio de las actuaciones. No permite que las cuestiones que se vinculan con la libertad del imputado y demás medidas cautelares impidan la prosecución de las actuaciones hasta que exista la sentencia definitiva. Impide que estando radicada la causa ante el tribunal oral, éste demore la comunicación al tribunal de alzada donde se encuentra el recurso pendiente. Además, que el tribunal de alzada dé prioridad de tratamiento a las causas que están en el tribunal oral, amén de aquellas obrantes en el marco de causas con personas que están detenidas. Este es el contenido, en términos generales, del expediente CD 22/08, que se refiere a la acusación, y tiene como objetivo, también, abreviar los plazos y facilitar los procedimientos.

A su vez, como el anterior proyecto, también cuenta con sanción de la Cámara de Diputados y comienza por limitar la figura del emplazamiento, aunque —como después vamos a observar— no se ha eliminado totalmente. En esta oportunidad, ha sido reemplazado por la adhesión. Esto es, durante el plazo que se establece para interponer estas adhesiones, dentro de los tres días de la notificación; allí se puede presentar la recusación, lo mismo que con los otros motivos que ya establecía la norma para recusar en la etapa de la instrucción, antes del juicio.

Con relación a las apelaciones, a partir de la sanción de este proyecto se establece que en ellas se deben formular o indicar los motivos, y quienes tengan derecho a apelar y no lo hubiesen hecho podrán adherir a los presentados en el plazo de tres días. En el nuevo sistema, si la apelación no lo rechazara, se llama a audiencia en el término de tres días con las partes. Si el interesado no concurriera, obviamente, se lo declarará desistido. La audiencia es *in voce*, y los que han apelado deben fundamentar y peticionar, como también ampliar o desistir de algunos motivos. Lo que no pueden es agregar nuevos. El procedimiento es tan amplio que se permite intervenir a los que no hubieran apelado. Los jueces del tribunal pueden formular preguntas a los comparecientes, siendo pública la audiencia.

Particularmente, creo que los dos proyectos que estamos tratando forman parte de un conjunto de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por la Cámara de Diputados que tienen como objetivo final facilitar el procedimiento, acotar los plazos y posibilitar recusaciones, sin que —tanto por aspectos legales como por chicanas que,

inclusive ,realicen los propios profesionales— se demore la detención y la administración de justicia respecto de aquellos que la necesitan con rapidez. Por eso, como dije hace instantes y repito ahora, esta cuestión no involucra solamente una preocupación del Poder Ejecutivo a raíz de la cual se requiere el tratamiento de este proyecto con inmediatez. Creo que este tema atiende a una preocupación de toda la sociedad.

Además, escuché infinidad de veces en este Senado a muchos senadores referirse al problema judicial y a las dificultades que existen al respecto. Ni hablar del periodismo, que también, con razón, ha tocado esta cuestión. Sin embargo, a veces, la culpa no radica exclusivamente en los jueces, si nosotros no brindamos —como nos corresponde— la posibilidad de que esos plazos se acorten.

Pero creo que con la ley que hemos aprobado anteriormente y con estos dos proyectos, se abreviarán los plazos y, en alguna medida —sin presumir que tengan la perfección legislativa—, van a facilitar el objetivo que se busca, o sea, brindar una mejor administración de justicia a todos los habitantes de la República Argentina.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley en revisión por el que se agilizan las actuaciones procesales en el ámbito penal y se consagra el derecho constitucional del imputado a un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable, como así también el proyecto de ley por el que se reforman las normas del Código Procesal Penal de la Nación.

Debo manifestar que coincidimos plenamente con los objetivos y los fundamentos del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a la necesidad de dotar de celeridad a las causas y de buscar reformas al Código Procesal Penal tendientes a otorgar certidumbre no solamente al imputado, sino a los propios damnificados por las violaciones o transgresiones al Código Penal. En eso, lógicamente, no podemos dejar de coincidir.

Coincidimos también en que resulta notorio que, en más de una oportunidad, cuando se dan los retrasos en las conclusiones definitivas o en el dictado de la sentencia, ello implica, prácticamente, una especie de negación de justicia que sufren la víctima, los familiares y, eventualmente, el propio damnificado.

Del análisis somero que hemos realizado respecto de estos dos proyectos, recalco una vez más que compartimos sus objetivos, propósitos y —porqué no decirlo— algunas de las reformas puntuales que se introducen en ambos dictámenes. Ahora bien, el tema no es menor, porque estamos hablando de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y acá se ha hecho hincapié en la premura de la gente, en la premura de la sociedad por contar con normas razonables y con juicios que contengan la celeridad y la eficacia que nos consagra la propia Constitución.

También quiero recordar a este cuerpo que en 2003 —cuando se trató un paquete de medidas enviado por el propio Poder Ejecutivo nacional con motivo de los secuestros extorsivos— y en 2004 —cuando se generó la gran movida, a partir del caso de Axel Blumberg, donde en realidad existió un fuerte clamor concreto—, el Senado de la Nación se dio su tiempo para consultar a la Procuración General, al Ministerio de Justicia, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, a los jueces de la Nación, a los fiscales, al departamento del Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y a los doctrinarios especialistas sobre el tema. Y todo esto consta en las versiones taquigráficas de las reuniones que en el transcurso de esos años se llevaron a cabo en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Yo no integraba el cuerpo en 2003 y 2004, pero creo que los temas eran de tal envergadura que requerían, en función de las normas a modificar o a crear, el debate, la

discusión y las consultas; más allá de la premura y del reclamo de la sociedad, este Senado se dio su tiempo para analizar en todos sus pormenores las reformas puntuales en los casos especiales.

Digo todo esto porque estamos reformando el Código Procesal; normas de fondo en las que —repito— podemos coincidir. Independientemente de que se pueda coincidir a simple vista, nada admite que el Senado no se dé su tiempo para el análisis, para el estudio y para la consulta; porque creo que hay mucho para enriquecer, porque el Poder Ejecutivo nacional, al fundamentar en el proyecto 22/08 la necesidad de reformar las normas del Código Procesal Penal de la Nación, hace hincapié en la necesidad de avanzar en la búsqueda de sentencias definitivas en aquellas causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Inclusive, me permito dar lectura a la fundamentación del Poder Ejecutivo, que hace referencia a que el excesivo retardo en el trámite de las causas referidas se refleja en los datos estadísticos. Nos referimos a los delitos de lesa humanidad. Dice que existen en la actualidad 922 personas implicadas en tales delitos. De las 922, solamente 14 fueron condenadas; 281 están procesadas con prisión preventiva; 77 procesadas excarceladas sin preventiva; 44 están prófugas; 140 acusados fallecidos; 5 afectados por incapacidades; y culmina explicando claramente que casi un tercio de los imputados tiene pendiente la resolución de su responsabilidad en los crímenes investigados. Es decir que se centraliza en la fundamentación de las reformas del Código Procesal Penal para dar celeridad a los delitos que tienen que ver con la época del terrorismo de Estado.

Ahora bien, fíjese, señor presidente que, en su oportunidad, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley, el 1327/07, que establece un procedimiento abreviado para la tramitación de las causas por delitos de lesa humanidad y un sistema por el cual algunas normas del Código Procesal Penal, si bien no son modificadas, pueden ser interpretadas en un sentido particular con este procedimiento especial tendiente a dar celeridad a estas causas que están paralizadas.

A la propia Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, con fecha 26 de marzo, el bloque se dirigió con el agrado de solicitar la urgente incorporación de este proyecto en el temario de la reunión de comisión. ¿Por qué resalto esta cuestión puntual? Uno puede entender los tiempos de las comisiones, el hecho de dar prioridad a un tema y a otro no, porque es parte de la dinámica legislativa. Así lo entiendo y me parece bien. Pero cuando incorporamos sobre tablas un proyecto de ley que —en la fundamentación del eje central de las reformas a las normas del código de fondo, del Código Procesal Penal de la Nación— hace hincapié en dotar de celeridad a las causas que tienen que ver con el terrorismo de Estado, me parece que, en este caso particular, el planteo que hicimos ayer, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en cuanto a consultar a especialistas en el tema, era más que oportuno. Porque creo que había mucho para dar, para enriquecer y para aportar.

A su vez, la bandera de los derechos humanos no es una bandera del gobierno, sino la bandera de todos y, en el avance en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, una justicia que actúe con celeridad también es la pretensión de todos; por lo tanto, este proyecto merecía, por lo menos de parte de la Comisión, el tratamiento conjunto con este proyecto que hoy el Poder Ejecutivo somete a nuestra consideración y pide su eventual aprobación.

Señor presidente: coincidimos en la necesidad o en la argumentación del porqué de la reforma. Por eso, tanto en el C.D. 21/08 como en el C.D. 22/08, nosotros vamos a

abstenernos. Estoy plenamente convencido de que si el Senado se hubiera tomado su tiempo, una semana más, para que pudiéramos consultar y acercar a la Comisión la opinión de especialistas en el tema, este bloque habría acompañado la iniciativa. La falta de tiempo y hasta —si se quiere— de responsabilidad para acompañar —por lo menos, de parte de nuestro bloque— nos lleva, en el caso particular de estos dos proyectos, a solicitar autorización para la abstención.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: este proyecto es el que mencioné cuando cuestioné que tratáramos en conjunto los cuatro proyectos. Porque, si lo analizamos, como dijo recién el miembro informante, se refiere a la existencia de recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, es decir, los tribunales que se han creado en virtud del proyecto que se votó en primer lugar. Entonces, mal podíamos tratar y votar todo junto, cuando estábamos incorporando tribunales inexistentes. No podíamos regular recursos pendientes de tribunales que no existen.

Esta reforma, a *contrario sensu* de lo que ha dicho el miembro informante, creo que afecta gravemente la garantía constitucional de la defensa en juicio. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de tener jerarquía constitucional tratados tales como la Convención de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la impugnación en un proceso no es de ninguna manera un recurso dilatorio del abogado — y menos, en el ámbito penal— sino, por el contrario, el uso de la garantía constitucional de la doble instancia establecida por dichos acuerdos. Esto está contemplado en el artículo 8°; apartado 2°; inciso h), de la Convención de Derechos Humanos, y en el artículo 14, apartado 5°; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Consecuentemente, de ninguna manera podemos evaluar que la deducción de recursos es un instrumento dilatorio o, como escuché recientemente, una chicana de los abogados para demorar las causas.

Amén de ello, y sentada la posición respecto del derecho constitucional recursivo, veo un grave inconveniente en esta reforma, pues establece que se podrá continuar —establece una excepción al principio general en virtud del cual el recurso tiene efecto suspensivo— con la causa y llegar hasta el límite del debate, no obstante la existencia de recursos pendientes.

¿Por qué creo que es errado votar esta reforma de esta manera? Porque a partir de los casos "Quiroga" y "Casal" —a través de ellos, la Corte ha establecido cómo deben transitarse los actos procesales en los procesos penales para garantizar la doble instancia—, el tribunal que actúa como tribunal de apelación no puede ser el mismo que realiza el debate oral. Y las estructuras, a lo largo y a lo ancho del país, se están adaptando a esta interpretación de la Corte, que no hace otra cosa que cumplir con los tratados internacionales, que fueron jerarquizados en virtud de su incorporación en la Constitución nacional.

Este proyecto de modificación del Código Procesal Penal dice que la causa podrá avanzar hasta el debate oral. O sea, podrá existir la audiencia pública de evaluación de pruebas por parte del tribunal que va a efectuar el debate oral, mientras se están sustanciando los otros recursos. Además, se expresa que el tribunal que intervendrá en el debate oral deberá notificar al tribunal que interviene en los recursos que la causa se encuentra en ese estado.

¿Cuál es el problema? Que es probable que los recursos se refieran a nulidades de pruebas o a nulidad del acta de allanamiento —que es un "clásico" del proceso penal—; o

que, por ejemplo, se haya planteado la nulidad con respecto a una audiencia testimonial. Puede suceder que en la audiencia de producción de pruebas, esas pruebas hayan sido incorporadas al proceso. En consecuencia, el tribunal que actuará en el debate oral puede llegar a aceptar esas pruebas y decir "tengo por incorporada el acta de allanamiento"; y que el abogado —o el fiscal— diga "tenga por reproducidos los testigos". Mientras tanto, la defensa puede estar impugnando esas declaraciones de nulidad; y las pruebas pueden ser incorporadas por vía de prueba documental al debate oral.

En consecuencia, por un lado, tendremos un tribunal que está entendiendo en los recursos, que puede hacer lugar al recurso y anular un procedimiento y, por el otro, todo un avance del proceso oral que quedará sin efecto, porque lo que el tribunal de apelación declaró nulo no puede ser tomado como prueba fehaciente por el tribunal del debate oral.

Entonces, de ninguna manera este proyecto agiliza las causas; por el contrario, las va a retardar y, además, provocará algo mucho más grave: abrirá las puertas para que la defensa del imputado pueda plantear un prejuizgamiento. Porque ese tribunal que dijo "tengo por incorporadas y acepto las pruebas" habrá prejuizado sobre la validez de la temática probatoria si luego el tribunal de apelación las declara nulas.

Entonces, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de esta reforma al Código Procesal Penal. Coincidimos con la doctrina publicada en consonancia con distintos fallos de la Corte y con los pronunciamientos que hubo en las revistas especializadas sobre este proyecto de reforma diciendo que, en realidad, hay una tergiversación, y que los recursos que en este momento se aceptan y se contemplan —incluso, a raíz de fallos de la Corte— que hacen a la defensa del imputado son en garantía y en cumplimiento de lo que establecen los pactos internacionales que hemos incorporado a nuestra Constitución, por lo que, de ninguna manera, son recursos dilatorios. Tal como está planteada esta cuestión, se corre el riesgo de demorar más la solución definitiva de las causas.

Reitero lo que dije hace un momento, cuando se trataba otro proyecto: la agilidad de las causas pasa por establecer plazos que no estamos determinando ni incorporando en este cuerpo normativo —yo no conozco el proyecto de la Unión Cívica Radical, al que se hizo referencia—. Creo que una verdadera reforma del Código Procesal, tendiente a dinamizar los actos procesales, pasa por establecer plazos a los jueces, para que resuelvan.

Se ha dicho que el plazo para resolver sobre la prisión preventiva no es un mero plazo ordenatorio; eso es lo que está diciendo la jurisprudencia. Entonces, debemos trabajar en establecer plazos perentorios cuando están en juego la libertad de las personas, los bienes, etcétera, en el marco del proceso penal; o sea, plazos perentorios para dictar el procesamiento, para instruir la totalidad del sumario, etcétera, y no limitar la vía recursiva o pensar que esta es sólo dilatoria. El avance del debate oral, mientras tenemos pendiente la vía recursiva, no es el camino aconsejable para llegar al objetivo propuesto y que todos queremos, por cuanto nadie quiere que haya gente con prisión preventiva en causas donde no se pueden hacer los debates orales por retardo de causas o por exceso de tramitación. Queremos una justicia dinámica y rápida, que llegue a una solución justa y equitativa en las causas.

Si no se modifica el proyecto en el sentido indicado, nosotros vamos a votar negativamente.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para adelantar mi voto afirmativo en los dos expedientes en tratamiento, C.D. 21/08 y C.D. 22/08, en sintonía con el voto que ha sustentado el bloque socialista en la Cámara de Diputados de la Nación. Consideramos que

las modificaciones planteadas al Código Procesal Penal de la Nación son correctas y están fundamentadas, esencialmente, en la necesidad de agilizar las actuaciones procesales en el ámbito penal, sobre todo, en las causas por violaciones a los derechos humanos.

Pido autorización al cuerpo para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones y reitero una vez más que voy a votar afirmativamente ambos proyectos.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Morales. — Señor presidente: tal como lo adelantara el señor senador Luis Naidenoff, nosotros vamos a pedir autorización para abstenernos en la votación de los expedientes C.D. 21/08 y C.D. 22/08.

En general, ya adelantamos que compartimos el criterio que adopta el Poder Ejecutivo, aunque avanza un poco más allá de algunas de las cuestiones solicitadas por el CELS. En efecto, el CELS no había planteado modificar el Código de Procedimientos, sino que postuló tres ejes de acción al Poder Ejecutivo, a fin de acelerar las causas por violación de derechos humanos. Para el mencionado organismo, el primer objetivo a desarrollar por el Poder Ejecutivo nacional era contar con una información sobre la situación de los juicios en todo el país y, a partir de ella, definir una estrategia integral para avanzar en las investigaciones y llegar a un juicio rápido. El segundo objetivo era implementar una política de racionalización de los casos abiertos, a fin de dar lugar a su ordenamiento. El tercer objetivo era articular con el Poder Ejecutivo todo lo vinculado con el tema de protección de testigos, asunto sobre el que vamos a volver cuando se considere el próximo expediente. Estas eran las recomendaciones del CELS.

De todos modos, el hecho de que el Poder Ejecutivo avance en la modificación del Código de Procedimientos me parece una avance. Inclusive, si uno mira el contenido del expediente C.D. 22/08, hay aspectos que nos parecen positivos. En ese sentido, concordamos con lo relacionado a la oportunidad en caso de recusación, la sustitución del 450 y la abreviación de plazos y lo relacionado a las resoluciones del tribunal. No obstante ello, quiero dejar sentado que nuestro bloque va a solicitar la abstención, dado que no se entiende por qué el bloque oficialista no ha permitido profundizar el debate y hacer una serie de aportes.

Reitero lo que se dijo al argumentar el voto negativo frente al requerimiento de los dos tercios para el tratamiento de los temas. Sin perjuicio de que lograron el número, el bloque oficialista debiera repensar esta situación, porque no le hace bien al Senado. Los legisladores de la oposición, por lo menos, no son escribanos del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que cumplir una acabada función e, independientemente de que nuestros argumentos sean más o menos profundos y de que puedan gustarle o no al presidente del bloque del Frente para la Victoria, ello no quita que tengan cuestiones para aportar a las iniciativas que se tratarán esta noche.

Reitero que se había solicitado la participación de algunos juristas que, a decir verdad, hicieron una propuesta que es bastante más específica que lo pretendido por el Poder Ejecutivo. En efecto, no sólo tiene que ver con cambios en el Código de Procedimientos vinculados estrictamente con delitos por violaciones a los derechos humanos, sino a todo tipo de delitos. La verdad es que el proyecto que han planteado los doctores Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Alessio, y que es el que se ha tomado como propio desde el bloque de la Unión Cívica Radical, tiene que ver con un régimen específico para regular los procedimientos de la materia de los delitos por violación de derechos humanos. Se vincula con tener en cuenta una realidad que se ha producido, a partir de diversas declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Altos”, “Almonacid Arellano”; de la Corte

Europea de Derechos Humanos en el caso “Kolk” y otros y los resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, donde se deja establecido claramente que los delitos por violación de derechos humanos son imprescriptibles y, en consecuencia, requieren de un régimen especial, no sólo en materia de procedimientos, sino también en materia de su tratamiento penal.

Además, tiene que ver con la realidad que se produce a partir de que, por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, en algún punto se suspende la tramitación de los juicios por violaciones masivas de los derechos humanos —lo que sucedió entre 1984 y 1990— y se utiliza el procedimiento sumario que prevé el Código de Justicia Militar y la legislación penal vigente.

A partir de la sanción de estas leyes se paralizaron todas estas causas relacionadas con violaciones masivas de derechos humanos. Luego, estas causas se reponen como consecuencia, primero, de la confirmación de estos principios internacionales, a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Y, después, se superponen con otras, porque los mismos denunciantes en causas por violaciones masivas de derechos empiezan con los juicios por la verdad. Entonces, comienzan a aparecer organizaciones y personas que formulan las mismas denuncias en causas por violaciones a los derechos humanos y en los juicios por la verdad. Este es el tema que no va a ordenar el proyecto que trae a consideración el Poder Ejecutivo.

Por eso, la iniciativa que proponen tanto Gil Lavedra como D' Alessio tienen que ver con un tratamiento específico para producir un ordenamiento en punto a los siguientes temas: por ejemplo, tramitarán en los tribunales federales con jurisdicción en lo penal que resulten competentes en razón del territorio. Es decir, allí se establece un criterio que tiene que ver con la territorialidad en las causas de violación de derechos humanos. Sigo citando el proyecto en cuanto a que indica que las causas cuyas víctimas hayan padecido cautiverio en el mismo centro clandestino se concentrarán en el tribunal que hubiera prevenido en uno de esos casos. Luego, avanza en el concepto de cuándo un tribunal ha prevenido al indicar que se considerará que previno un tribunal que en fecha anterior hubiere iniciado actuaciones respecto de alguno de los delitos cometidos en ese centro. Es decir, se trata de un principio ordenador —el de la territorialidad— y cuál es el tribunal que será competente para tomar distintas causas en las que a veces los mismos actores o distintos denunciaron por los mismos hechos: en algunos casos, por conducto de las causas de violación de derechos humanos; y, en otros, por los juicios por la verdad. Entonces esta es la gran dispersión de juicios que hay en todo el país, que no va a resolver la modificación puntual del Código de Procedimiento, que requiere un tratamiento específico.

Hay otras cuestiones: por ejemplo, mientras se encuentra en etapa de instrucción el juez dispondrá que tramiten en un solo expediente —o no—, atendiendo a razones de economía procesal y de mayor facilidad en la investigación.

Nuestro proyecto también establece responsabilidad para los jueces: al juez que demorare la instrucción con motivo de la cuestión de competencia, se lo tendrá por desistido de ella.

En definitiva, se trata de normas específicas que van acotando los plazos, como recién planteaba la senadora Negre de Alonso, es decir, un régimen especial que va a acumular todas las causas y que va a hacer que no las dememos cincuenta años. Como están las cosas, si no hay un tratamiento específico para las causas por violación de derechos humanos, van a morir los imputados e incluso habrá menos testigos de los que hay.

Ese es el asunto que queríamos aportar al debate a efectos de que, en todo caso,

tomemos la reforma que propone el Poder Ejecutivo y también tengamos en cuenta estos temas, que van a ser principios rectores y ordenadores para acumular todas las causas.

Entre otras cuestiones, por ejemplo, para estos casos establecemos en uno de los incisos que no será de aplicación el artículo 36 del Código Procesal Penal —que plantea los casos de nulidad por incompetencia para determinados casos—, sin perjuicio de que las partes podrán hacer los planteos de nulidad si no están de acuerdo, de manera tal que se vaya rápido a juicio y se pueda lograr la concentración de las causas.

Los jueces ordenarán las medidas de prueba en forma simultánea, salvo aquellos que sólo se adviertan como resultado de la producción de otras.

Durante el sumario no podrán transcurrir más de cinco días: es decir, plazos específicos para la instrucción sumaria.

Cuando se hayan acumulado elementos suficientes, se dispondrá el procesamiento del imputado.

En cada una de las etapas de la acción sumaria hasta llegar al juicio se establecen, puntualmente, cuáles son las medidas que hay que tomar para acelerar las causas.

Todas las cuestiones que en él se planteen serán sustanciadas por vía de incidente, sin paralizar su trámite en los casos en que en el sumario no se admitan debates.

En otro artículo de nuestro proyecto se plantea también la cuestión de los defensores, con quienes también existen problemas. En definitiva, se dilatan las causas porque resulta que no hay defensores o porque los imputados no tienen abogados. Entonces, acá se establece y se prevé también el principio de la presunción de que nadie es culpable hasta que no se demuestra esa situación, mediando el juicio que corresponde y que garantice el derecho a defensa.

Por lo tanto, además de la gran dispersión que existe en todos los tribunales del país, hay cuestiones, que tienen que ver con la promoción del juicio, que dilatan innecesariamente estas causas.

Los miembros del Consejo de la Magistratura —esto seguramente lo podrá convalidar el senador Pichetto y quienes forman parte del Consejo— hicieron una recorrida por nuestro país. Han visitado, justamente, los juzgados del interior. Hubo una reunión del NEA, por ejemplo, de la que participó el senador Ernesto Sanz. Estuvieron haciendo un relevamiento y lo cierto es que estamos hablando de más de 1.000 o 1.200 causas en juicios por violación a los derechos humanos, en las que realmente existe una gran superposición de causas. Hay que ordenar ese tema, que no tiene que ver con delitos comunes sino con delitos de violación a los derechos humanos.

Por eso, queríamos que vinieran los autores, y si el bloque del Frente para la Victoria quisiera podrían desarrollar estos argumentos que tienen que ver con la necesidad de establecer un régimen especial por los delitos de violación a los derechos humanos con mucha más profundidad y propiedad.

En lo que se refiere al tema específico o casuístico de cada juzgado, en el proyecto también se prevé, también, la cuestión del presupuesto.

A fin de que los tribunales que tengan a su cargo estos casos puedan contar con los medios necesarios para llevar a cabo eficazmente su investigación y juzgamiento, se establece que de Rentas Generales se le asignarán fondos equivalentes a dos sueldos de secretario de primera instancia por cada proceso en el que las partes sean más de tres, y a cinco sueldos de secretario en aquellos que tengan diez o más.

La verdad es que se trata de un régimen específico que prevé todo: no sólo los procedimientos sino también el tema de los defensores

Cabe mencionar el tema de ordenar al Poder Ejecutivo el Ministerio Público Fiscal que confeccione la base de datos en la que, por zona y subzona de seguridad, se registren pruebas acumuladas, es decir, hasta la casuística que también plantea el CELS. El CELS dice: “Vean cuáles son las denuncias, cuáles son las pruebas, cuáles son los juicios; y el Ejecutivo, que acumule.”

Hay que modificar el Código de Procedimientos. Esto es lo que no veía el CELS. Por eso, nos parece bien el abordaje del Poder Ejecutivo, pero en materia de violación de derechos humanos tiene que ser específico, tiene que ser particularizado, tiene que ser el complemento del proyecto que propone el Poder Ejecutivo. De ahí que nos parece que las propuestas no chocan ni son contradictorias. No es contradictoria la propuesta de nuestro bloque —el radicalismo— sino complementaria de la modificación que aborda el Poder Ejecutivo.

La verdad es que no nos gusta que “nos corran” como si fuéramos escribanos del Poder Ejecutivo, máxime cuando estamos hablando de una semana para debatir un tema que es importante, central, que sabemos que el Poder Ejecutivo tiene en vista y que quiere acelerar.

Nosotros tenemos esta propuesta desde el año pasado. Ya ha dicho el senador Petcoff Naidenoff de qué manera hemos pedido e instado trámites para que este tema se trate. Ahora, resulta que planteamos los temas pero los tratamos acá sólo cuando la agenda la impone el Poder Ejecutivo. Eso no está bien, porque habla mal del Congreso. En verdad, eso sí desnaturaliza nuestra función. ¿Por qué? Porque nos resta autonomía; nos quita la posibilidad de tener la iniciativa para resolver temas de la política pública nacional, particularmente en materia de derechos humanos.

Estos son los aspectos que en términos generales y centrales propone nuestro proyecto, que realmente creemos constituye un aporte.

Aclaro que no estamos en condiciones de votar en contra. No vamos a votar en contra de este proyecto porque estamos de acuerdo con la causa de acelerar los juicios por violación a los derechos humanos y los juicios por la verdad. Por eso, vamos a pedir autorización para abstenernos, ya que nos molesta esta situación.

La verdad es que el bloque oficialista podría haber tenido la actitud de permitirnos este debate, de introducir algunos temas y algunas consultas, y de convocar a algunos otros juristas del justicialismo que también conocen acabadamente el tema de violación de los derechos humanos. Así, indudablemente habríamos enriquecido el proyecto.

Hechas estas reflexiones, reiteramos que no somos escribanos del Poder Ejecutivo, y menos de este Poder Ejecutivo. Somos senadores de la Nación y representamos a nuestras provincias, somos la representación federal y representamos a partidos políticos. Nosotros queremos enriquecer el debate porque esa es la misión, la obligación y la responsabilidad que tenemos.

Por estos motivos, reiteramos nuestro pedido de abstención en estos temas.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a ser muy breve, así podemos pasar a votar.

Es una verdadera lástima que, pese a compartir los fines del acortamiento de plazos y la aceleración de las causas de los derechos humanos, la Unión Cívica Radical se abstenga de votar un proyecto que es bueno.

El proyecto instala en las audiencias de alzada la oralidad y un plazo corto de tres días para resolver. Determina, también, nuevas reglas para el proceso de recusación y tiene como objetivo central la celeridad —lo dijo el senador Marín— y que las causas sean

remitidas al tribunal oral sin ningún obstáculo: es decir, impedir toda una actividad que, además, se ha comprobado en los últimos años.

No es que estemos legislando cuando al Poder Ejecutivo se le antoje; lo estamos haciendo sobre la base de una realidad y de una experiencia. Se ha corroborado: están la opinión y el dictamen del Procurador, que ha dado instrucciones a los fiscales de propender a la aceleración de las causas sobre derechos humanos. Ello es así especialmente en la materia de la casación penal, donde hay toda una actividad judicial defensiva de articulaciones que están dentro del marco de la legalidad porque la ley lo permite, pero que indudablemente entorpecen la elevación de la causa a juicio, que es el destino final para impartir justicia: algo de lo que estoy convencido que todos queremos aquí.

Quiero hacer un rescate de las figuras de los dos juristas de la Unión Cívica Radical —tanto del doctor D'Alessio como del doctor Gil Lavedra—, quienes seguramente han trabajado el proyecto con la mayor seriedad, especialmente en el caso de Gil Lavedra, que fue uno de los hombres que intervino en el juzgamiento a las juntas militares...

Varios señores senadores. — ¡El doctor D'Alessio también!

Sr. Pichetto. — El doctor D'Alessio también.

Por lo tanto, rescatamos la buena fe, pero creemos que el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo contiene todos estos planteos, todos estos principios, como la búsqueda de la celeridad y de la oralidad, incluso para dar rapidez a la resolución. Fundado el recurso, los jueces pueden hacer preguntas, en tres días tienen que resolver, y la causa tiene que ser elevada a juicio.

— *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.*

Sr. Pichetto. — Como última reflexión, quiero hacer un rescate, porque si mal no entendí, el senador Morales hizo un cuestionamiento respecto de la acumulación de causas que tenían que ver con los juicios por la verdad y los que involucraban violación a los derechos humanos.

En realidad, los juicios por la verdad conformaron el espacio por el cual se permitió mantener estas causas vivas. Los procesos que vivimos —tanto legislativos como también el indulto— prácticamente habían cerrado el camino de la tarea judicial.

Las leyes de obediencia debida y de punto final, sancionadas por el Congreso de la Nación en la etapa del doctor Alfonsín, y, posteriormente, el indulto del doctor Menem, cerraron la posibilidad de que los jueces investigaran causas referidas a violación de derechos humanos. ¿Cuál fue el único camino que les quedó a muchos jueces, incluso a algunos jueces civiles? Mediante la búsqueda de la identidad, de la búsqueda de la verdad, mantuvieron vivo un conjunto de causas que hoy hay que acumular. Coincidió en la necesidad de la acumulación y así evitar la dispersión.

Ese ha sido un espacio de preservación de la memoria y, fundamentalmente, de continuidad en la investigación, en especial para la identificación de bebés y la búsqueda de identidades. Además, también ha servido para la necesaria investigación de los hechos vinculados con la desaparición de personas. Fue así que se mantuvo viva la llama de la justicia en un espacio que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo de dos gobiernos distintos habían acotado y casi cerrado. De tal modo que estamos ante un tema donde tenemos coincidencias.

Pedir que replanteen su posición no me parece lógico. Creo que estos dos proyectos sintetizan la aspiración del Poder Ejecutivo de que estas causas avancen, de que se terminen las chicanas y las articulaciones jurídicas dilatorias, y de que los tribunales orales empiecen a

funcionar procediendo a hacer el juzgamiento de las conductas que han sido investigadas.

En virtud de los fundamentos expuestos, pedimos que se voten afirmativamente los dos proyectos.

Sr. Presidente. — Antes de pasar a la votación de los proyectos, hay que votar algunos pedidos de abstención.

Sr. Secretario (Estrada). — Las abstenciones solicitadas son de los senadores Martínez, Petcoff Naidenoff, Marino, Morales, Vera, Massoni y Estenssoro.

Sr. Presidente. — En consideración los pedidos de abstención.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las abstenciones.

A continuación, corresponde votar el C.D.-21/08: dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se agilizan las actuaciones procesales en el ámbito penal y se consagra el derecho constitucional de todo imputado a que un pronunciamiento definitivo lo desligue en un plazo razonable, sometido a juicio penal.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Pido permiso al cuerpo para abstenerme en la votación.

Sr. Presidente. — En consideración el pedido de abstención formulado por el señor senador Castillo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Queda probado el pedido de abstención formulado por el senador Castillo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 8 abstenciones.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 4.*¹⁰

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.¹¹

14. CD-22/08 - Reforma del Código Procesal Penal de la Nación

Sr. Presidente. — A continuación, pasamos a votar el dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se reforma el Código Procesal Penal de la Nación.

Tiene la palabra la señora senadora Viudes.

Sra. Viudes. — Señor presidente: solicito autorización para realizar inserciones.

Sr. Presidente. — En consideración el pedido de inserción formulado por la señora senadora Viudes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado el pedido de inserciones respecto de los dos proyectos.¹²

Sr. Secretario (Estrada). — En lo que respecta a las abstenciones, además de las solicitadas

¹⁰ Ver el Apéndice.

¹¹ Ver el Apéndice.

¹² Ver el Apéndice.

por la Unión Cívica Radical, también están las de la señora senadora Estenssoro y del señor senador Castillo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola votación.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 8 abstenciones.

— *El resultado de la votación surge del Acta N° 5.* ¹³

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.¹⁴

15.CD-26/08 - Creación de un fondo de recompensas para búsqueda de personas

Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se crea un fondo de recompensas a fin de contribuir a la detención de personas buscadas por la justicia en causas penales por violación a los derechos humanos.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: seré breve.

Este proyecto por el que se crea un fondo de recompensa tiene como finalidad propender a la investigación de los hechos y a lograr el esclarecimiento a través de la información que puedan brindar personas que los conocen.

Algo novedoso es que pueden ser beneficiarios de este estipendio económico miembros activos de las fuerzas de seguridad o quienes hayan pertenecido a ellas, lo que diferencia a esta iniciativa de anteriores leyes de recompensa que se habían planteado, en algunos casos ligadas al narcotráfico, donde el personal de seguridad estaba incluido. Pero por la materia de investigación son personas que han prestado servicio las que pueden llegar a tener acceso a esa información necesaria.

Estoy convencido de que este debate, lógicamente, abre planteos de perfil moral respecto de las características que tienen este tipo de figuras, donde a través del intercambio del dinero se obtiene información. En general, en los países modernos, en los del Primer Mundo, este sistema funciona. Se trata de la búsqueda de la verdad y de la investigación del hecho. El objetivo es lograr el esclarecimiento de lo que se está investigando, y el Estado, en este sentido, paga por una información que debe contribuir al esclarecimiento. No hace un análisis filosófico, espiritual o moral sobre la figura. Hay un objetivo central, que es el esclarecimiento del hecho. En este tipo de casos hasta incluso se puede estar buscando la identificación de restos y conocer el lugar en el que pueden estar enterrados. En fin, se trata de muchos aspectos que tienen que ver con esta materia tan sensible, referida a los derechos humanos. Por eso, consideramos que es una herramienta importante y necesaria para la investigación de este tipo de hechos. Son figuras que se utilizan en el derecho comparado, en el Derecho Penal.

Las organizaciones de derechos humanos son contestes en que se puede instrumentar una figura de esta naturaleza. De hecho, el Poder Ejecutivo ha trabajado y analizado todas estas figuras que votamos en la tarde de hoy. Ha conversado con las organizaciones de derechos humanos y existe el convencimiento de que estas normas sirven y pueden traer aparejado el esclarecimiento de hechos ocultos desde hace mucho tiempo.

¹³ Ver el Apéndice.

¹⁴ Ver el Apéndice.



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTÁMENES EMITIDOS EN LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES:

CD-19/08 y 29/08, CD-20/08 y CD-30/08, CD-21/08, **CD-22/08** y CD-26/08

HABILITACIÓN TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Acta N°:1

Fecha: 21 - 05 -08

Hora: 16:24

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Dos tercios de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempeate: NO

Presentes Identificados: 59

Votos afirmativos: 44

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 15

Total Presentes: 59

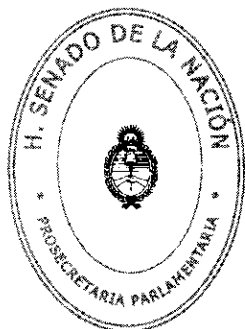
Abstenciones: -

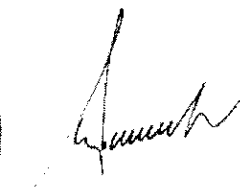
Ausentes: 13

Votos Afirmativos Necesarios: 40

RESULTADO de la VOTACIÓN

AFIRMATIVA




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

**Votación Nominal**

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTÁMENES EMITIDOS EN LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES:

CD-19/08 y 29/08, CD-20/08 y CD-30/08, CD-21/08, CD-22/08 y CD-26/08

HABILITACIÓN TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Acta N°:1

Fecha: 21 - 05 - 08

Hora: 16:24

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: Dos tercios de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempate: NC

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabian	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, A. Jolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	NEGATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	NEGATIVO	VIUDES, Isabel Josefina	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO UNA NUEVA CÁMARA,
CON FUNCIONES DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL

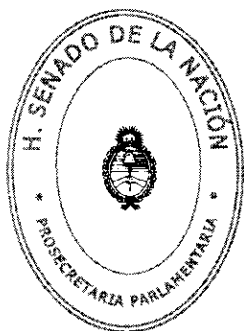
CD-20/08 y CD-30/08

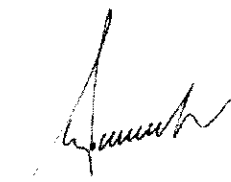
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:2	Fecha: 21 - 05 -08	Hora: 17:41
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: Mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: ROMERO, Juan Carlos	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	55	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	17
Total Presentes:	55	Abstenciones:	-
Ausentes:	17		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO UNA NUEVA CÁMARA,
CON FUNCIONES DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL

CD-20/08 y CD-30/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:2

Fecha: 21 - 05 -08

Hora: 17:41

Tipo de Quórum:mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:Mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:ROMERO, Juan Carlos

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Lilitana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FELLNER, Lilitana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AUSENTE	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabian	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
MORREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO	VERANI, Pablo	NEGATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AUSENTE	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	NEGATIVO	VIUDES, Isabel Josefina	AFIRMATIVO



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TODO EL PAÍS EN LOS CASOS DE LICENCIA, SUSPENSIÓN, RECUSACIÓN, EXCUSACIÓN O VACANCIA DE SUS MIEMBROS.

CD-19 Y 29/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta Nº:3	Fecha: 21-05-08	Hora:18:32
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C.	Desempate: No	

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	16
Total Presentes:	54	Abstenciones:	-
Ausentes:	18		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

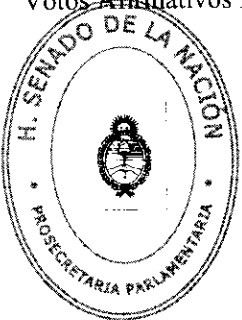
Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
ESTENSSORO, María Eugenia	AUSENTE	NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Estenssoro manifiesta a viva voz su voto negativo.

Modificaciones realizadas el 21/05/08

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	17
Total Presentes:	55	Abstenciones:	-
Ausentes:	17		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA



JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TODO EL PAÍS EN LOS CASOS DE LICENCIA, SUSPENSIÓN, RECUSACIÓN, EXCUSACIÓN O VACANCIA DE SUS MIEMBROS.

CD-19 Y 29/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:3

Fecha: 21-05-08

Hora:18:32

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AUSENTE	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIEFRA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AUSENTE	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
MARTINEZ, José Carlos	NEGATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	NEGATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE AGILIZAN LAS ACTUACIONES PROCESALES EN EL ÁMBITO PENAL Y SE CONSAGRA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE TODO IMPUTADO A QUE UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO LO DESLIGUE EN UN PLAZO RAZONABLE DEL SOMETIMIENTO A JUICIO PENAL.

CD-21/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:4

Fecha: 21 - 05 -08

Hora: 19:23

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Desempate: NO

Presentes Identificados:

52

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

6

Total Presentes:

52

Abstenciones:

8

Ausentes:

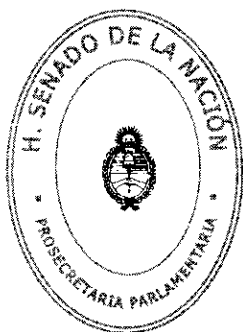
20

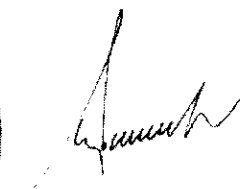
Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la VOTACIÓN

AFIRMATIVA




 JUAN JOSE CANALS
 PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
 H. SENADO DE LA NACION

**Votación Nominal****126° Período Legislativo - Ordinario - 6° Sesión**

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE AGILIZAN LAS ACTUACIONES PROCESALES EN EL ÁMBITO PENAL Y SE CONSAGRA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE TODO IMPUTADO A QUE UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO LO DESLIGUE EN UN PLAZO RAZONABLE DEL SOMETIMIENTO A JUICIO PENAL.

CD-21/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:4

Fecha: 21 - 05 - 08

Hora: 19:23

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempate: No

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Darío	AUSENTE	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	ABSTENCIÓN
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	ABSTENCIÓN	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raul	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	ABSTENCIÓN	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	ABSTENCIÓN
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERKA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabian	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, Ajolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AUSENTE	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	ABSTENCIÓN
MARINO, Juan Carlos	ABSTENCIÓN	VERANI, Pablo	AUSENTE
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	ABSTENCIÓN	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AUSENTE	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	ABSTENCIÓN	VIUDES, Isabel Josefina	AFIRMATIVO



Senado de la Nación

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN REFORMANDO E. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

CD-22/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:5

Fecha: 21 - 05 -08

Hora: 19:25

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

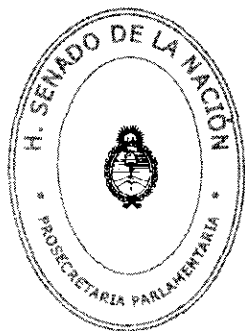
mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempate: NO

Presentes Identificados:	52	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	6
Total Presentes:	52	Abstenciones:	8
Ausentes:	20		
Votos Afirmativos Necesarios:	23	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA



Juan José Canals
 JUAN JOSE CANALS
 PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
 H. SENADO DE LA NACION



Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario 6° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN REFORMANDO EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

CD-22/08

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°:5

Fecha: 21 - 05 -08

Hora: 19:25

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C. C.

Desempate: No

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
BIANCALANI, Fabio Dario	AUSENTE	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, Maria José	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	ABSTENCIÓN
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	ABSTENCIÓN	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	ABSTENCIÓN	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	ABSTENCIÓN
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIEFRA M. Delia	NEGATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AUSENTE	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	ABSTENCIÓN
MARINO, Juan Carlos	ABSTENCIÓN	VERANI, Pablo	AUSENTE
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	ABSTENCIÓN	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AUSENTE	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
MASSONI, Norberto	ABSTENCIÓN	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO